



Universiteit
Leiden
The Netherlands

'Redes políticas' y procesos de democratización

Valdivia Rivera, S.

Citation

Valdivia Rivera, S. (2014, September 23). '*Redes políticas' y procesos de democratización*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/28793>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/28793>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/28793> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Valdivia Rivera, Soledad

Title: 'Redes políticas' y procesos de democratización. La relación Estado-movimientos sociales bajo el gobierno de Evo Morales en Bolivia, 2006-2013

Issue Date: 2014-09-23

Capítulo 2

Los movimientos sociales en el Estado neoliberal: la evolución del movimiento social en actor político

La llegada de Morales al poder a través de un proceso electoral formal presenta la irrupción de los movimientos sociales en el ámbito político institucional. Desde una perspectiva histórica, el periodo 1980-2000 puede ser entendido como la reformulación de un discurso reivindicativo en el que el análisis marxista y la centralidad de la Central Obrera Boliviana (COB), es remplazado por un análisis cultural alrededor de un discurso indigenista y adoptado por una diversidad de actores, pero cuyo liderazgo será finalmente asumido por los movimientos sociales indígenas. En particular en el periodo 2000-2005, en una crisis del sistema político, los movimientos sociales lograron un alto grado de incidencia política, hasta convertirse en el actor más importante de la política boliviana, llevando a la elección del líder cocalero Evo Morales a la presidencia. En este capítulo, dicho desarrollo histórico se analiza a través de una conceptualización ‘dialéctica’ de la relación Estado-sociedad, en la que ambas esferas de la realidad sociopolítica se encuentran en un proceso constante de mutua formación. Después de la transición democrática, se observa la emergencia de ‘nuevos movimientos sociales’ que atraviesan por un proceso de articulación política, hasta convertirse en el actor político principal en el escenario boliviano.

En la primera sección se observa el papel de los movimientos sociales, en realidad de la Central Obrera Boliviana como eje de articulación social, en la transición democrática. Aquí se puede ver cómo la transición democrática boliviana responde en gran medida a la caracterización de dicho proceso para la región latinoamericana, en el que después de un breve momento de centralidad política, los movimientos sociales son marginados del ámbito político con el objetivo de establecer el nuevo régimen democrático. Asimismo, en este periodo se observa la emergencia de ‘nuevos movimientos sociales’ caracterizados por ‘políticas culturales’, concretizadas en la corriente política del katarismo y la consolidación de una organización social de corte sindical, pero que responde a un perfil rural, a saber la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

En la segunda sección se analiza el papel que desempeña el movimiento cocalero, como nuevo movimiento social, en lo que se entiende como una creciente articulación política de los movimientos sociales. El vacío social que deja una COB debilitada, junto a la violencia que caracteriza el conflicto entre el movimiento cocalero y el Estado, se observan como factores importantes en la adopción de un perfil nacional que sirve como eje articulador para una serie de ‘nuevos movimientos sociales’ a nivel

local. Esto se ve concretizado en la creación del ‘instrumento político’, para el cual reformas neoliberales de descentralización emergen como un tercer factor de importancia para entender la emergencia de esta articulación política de movimientos sociales.

En la tercera sección se ubica la irrupción del movimiento social en el ámbito político en un contexto de crisis de legitimidad del sistema de partidos políticos en particular y del modelo de desarrollo neoliberal. Dicha crisis deriva en fuertes confrontaciones entre el Estado y la sociedad que son principalmente protagonizadas por los movimientos sociales urbanos –mostrando su incidencia política cada vez con mayor claridad- en oposición a planes gubernamentales. En el periodo 2000-2005 dichas confrontaciones derivaron en verdaderos escenarios de ingobernabilidad, en los que destacan los episodios de la Guerra del Agua en el año 2000 y la Guerra del Gas en el año 2003. Como se verá, la insurgencia social que caracteriza este periodo es indicativa de como el movimiento social se torna un canal legítimo de participación política y mediación hacia el Estado.

En la última sección, se analiza la sorpresiva decisión de los movimientos sociales de optar por el proceso electoral formal para acceder al poder político. Hasta entonces, los movimientos sociales bolivianos respondían a la caracterización más convencional ‘anti-Estado’ y en oposición a las estructuras formales de la política, pero en el punto álgido de la movilización social, se opta por la vía formal de competencia de poder, a través de la cual el MAS llega finalmente al poder. En la sección 2.4 se pretende explicar esta aparente contradicción a partir de una conceptualización que ubica al movimiento social y al partido político dentro de un mismo sistema, cuestionando así la distinción entre la política ‘institucionalizada’ y la ‘no institucionalizada’. En esta sección se destaca también el hecho que el protagonismo político pase de los movimientos sociales urbanos a los movimientos sociales indígenas, como clave para entender la victoria de Morales en los comicios de diciembre del 2005.

2.1 Los nuevos movimientos sociales y las políticas de ajuste económico: la COB, el katarismo y la CSUTCB (1980-1990)

Durante la dictadura de García Meza, como núcleo de la resistencia social, la COB sufrió grandes bajas en la medida en que sus principales líderes fueron exiliados y/o asesinados. Sin embargo, justamente por ese papel protagónico de lucha contra los regimenes dictatoriales, la COB se convertiría en el actor político dominante del periodo de transición democrática, con un alto nivel de legitimidad.

2.1.1 La transición democrática: el gobierno de la UDP y la COB

La precariedad de la institución estatal en el periodo de transición democrática es ilustrada por la peculiar dinámica que se dio entre el nuevo gobierno civil y

la COB. El gobierno de la Unidad Democrática Popular - UDP (1982-1985) fue en realidad un conjunto de partidos políticos de izquierda, débil por su fraccionalismo, actuando en repetidas ocasiones más en oposición que en apoyo al presidente (Morales, 2010: 205). Por otra parte, la explosión de demandas de distintos sectores de la sociedad dificultó considerablemente el accionar de este primer gobierno civil, en un periodo caracterizado por una aguda crisis económica y social, que culminaría con el llamado a elecciones un año antes de lo previsto.

Ibañez Rojo (2000) argumenta convincentemente que la crisis política y económica del gobierno de la UDP está directamente relacionada con la organización del movimiento obrero. Dado su papel de primer plano en la oposición al régimen autoritario, la COB emergía en la transición democrática como el único actor verdaderamente comprometido con la democracia. Esto no sólo hacía necesaria la colaboración con este actor, sino que implicaba también que sin consenso con el mismo no podía haber legitimidad y, por ende, gobernabilidad para el gobierno civil.

Esto explica porqué, desde un principio, Siles Zuazo invitó a la COB a formar un ‘co-gobierno’. La COB, consiente de la frustración que vivió esta modalidad de ejercicio político en el estado movimientista, respondió demandando la mitad más uno de los sitios en el Parlamento, como condición para iniciar cualquier tipo de negociación. Tal demanda implicaba la implementación inmediata y completa del plan económico que la COB había elaborado. La propuesta cobista, al proyectar una gran expansión del gasto público, se presentaba totalmente incompatible con las medidas necesarias para la urgente estabilización económica. Si bien se puede suponer que el liderazgo de la COB era consciente de la irracionalidad de sus demandas, su actitud intransigente puede ser entendida por el hecho de que la organización sindical no tenía ningún interés en una posible colaboración con el gobierno. El poder político de Siles Zuazo era socavado por el fraccionamiento al interior de la propia UDP, de tal manera que compartir el gobierno con ella simplemente representaba una manera de tratar la crisis sin obtener más influencia sobre las políticas económicas.

A esto se sumaba el agravante de la reconfiguración que empezaba a sufrir la constitución de la COB. En un momento, su base principal estuvo conformada por los trabajadores mineros, con una fuerte conciencia colectiva; pero esa unidad empezaba a erosionar a causa de la incorporación de tipos muy distintos de trabajadores (por ejemplo funcionarios públicos y trabajadores petroleros, sin experiencia sindical). Este desarrollo empujaba al liderazgo de la COB a mantener la unidad a través de su estrategia histórica de oposición al Estado, haciendo cada vez más encarnizado su enfrentamiento con el gobierno, al mismo tiempo que la crisis se profundizaba. De esta manera, el movimiento obrero se cerró a toda negociación por encontrar alternativas viables, prácticamente paralizando al gobierno de Siles Zuazo.

En la medida en que era imposible romper las relaciones con la COB al mismo tiempo que no se podía negociar con ella, el gobierno de Siles Zuazo se vio obligado a ceder a las demandas. En palabras de Ibañez Rojo: ‘The result of this inter-

play between a completely inflexible collective actor, tied to a maximalist programme of demands which was simply the sum of all the zero-sum conflicts launched by the rank-and-file in different sectors, and a government obliged to cooperate with it, was that Bolivia slid into the worst inflationary spiral ever seen in Latin America, and the labour movement suffered the worst legitimacy crisis in its history' (2000: 205).

Después de estos sucesos, el poder de la COB disminuiría en la misma medida en que las medidas de corte neoliberal le restaban físicamente su base social fundamental: la columna vertebral minera. Tras la caída de la UDP y ante el caos económico, Víctor Paz Estenssoro fue elegido en elecciones adelantadas como el nuevo presidente. Paz Estenssoro inmediatamente puso en marcha su plan de reestructuración económica, marcando el comienzo de lo que serían cerca de dos décadas de régimen neoliberal. Paz Estenssoro fue implacablemente riguroso en sus planes, en los que no había cabida para una COB. De tal manera, dirigió sus políticas a la desestructuración de los sindicatos obreros de oficio, resquebrajando las protestas que la COB lideraba contra sus planes. Las medidas de presión fueron respondidas con amenazas de despido a los huelguistas y contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas; de esa forma, se dictaron sucesivamente Estados de Sitio que facilitaron la detención y confinamiento de varios dirigentes. Aun así, la COB organizó la 'Marcha por la Vida y la Paz', resistiendo el plan gubernamental de cerrar los centros mineros (quebrando la COMIBOL) y la relocalización de sus trabajadores. A esta medida desesperada que fue iniciada en agosto de 1986, el gobierno respondió con la movilización del ejército para contener la marcha. Finalmente la dirigencia sindical negoció una salida pacífica, pero el acuerdo fue rechazado por gran parte de las bases. Así, la COB experimentaba una de sus derrotas más fuertes.

La gradual pérdida de legitimidad de la organización sindical se veía además agravada por la desestructuración material y política de la otrora poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de sus sindicatos mineros, determinando que la COB perdiera vida orgánica y su gran capacidad de convocatoria. De esta manera, desde 1986, la COB se reduciría cada vez más a 'un hecho formal de Congresos y Comités Ejecutivos (1). No obstante, es necesario subrayar la importancia de la COB en la memoria histórica colectiva, ya que continúa siendo el referente nacional de estructura y movilización social. Como explican Linera *et al.* (2010: 71) 'la forma sindicato, que habiendo preexistido a la COB, logró en ella su más importante

(1) La disminución de la COB llevó a que sus fracciones emprendieran negociaciones por separado. Esto produjo un cambio importante: los ampliados de la COB dejaron de ser un espacio de toma de decisiones de movilización, para formar un espacio en el que se exponían las distintas posiciones. De esta manera, en el pasado la decisión de movilización en la asamblea de la COB era efectiva, mientras que a partir de mediados de los '80, la capacidad de convocatoria disminuyó notablemente.

irradiación organizativa y política sobre la experiencia colectiva de las clases subalternas hasta ahora’.

De tal modo, la transición democrática en Bolivia coincide con la caracterización bosquejada en el capítulo 1. Como en muchas de las transiciones latinoamericanas, a pesar del éxito de los regímenes dictatoriales en desarticular y despolitizar a la sociedad civil, los actores de la sociedad civil jugaron un papel importante en la transición. Justamente la resistencia hacia un Estado represivo produjo la articulación de un fuerte actor social como la COB en el caso boliviano. El entusiasmo respecto de su papel democratizador fue sin embargo corto, dando lugar a una pérdida de legitimidad en el nuevo régimen democrático formal.

2.1.2 Los principios de un análisis culturalista: del katarismo a la CSUTCB

El movimiento campesino en Bolivia tiene también un origen sindical. Después de la Revolución del ’52 el campesinado fue organizado en sindicatos agrarios, en un modelo en el que la relación con el Estado era mediada por el partido de gobierno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Así, en 1953 se fundó la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) con el apoyo de los ‘comandos del MNR’ y afiliada a la COB (Albo, 2008: 29-32). Los sindicatos fueron formados primero en las haciendas y después en los ayllus, llegando a suplantar a la ‘comunidad’. En ese sentido, la creación de sindicatos agrarios por parte del Estado movimientista significó la cooptación de la población campesina a través de la creación de redes clientelares.

Con la llegada al poder del Gral. René Barrientos Ortuño, que inauguraría sucesivos gobiernos militares dictatoriales afines a la política exterior norteamericana, esa relación fue alterada con el denominado Pacto Militar-Campesino. Este instrumento fue concebido como una manera de confrontar a los sectores obreros radicalizados, y conectaba el sindicalismo para-estatal con las Fuerzas Armadas. Este último asumía un papel de interlocutor ante el Estado en torno a la defensa de las conquistas logradas en la Reforma Agraria. Los sindicatos agrarios ya habían sido lo suficientemente domesticados durante el gobierno del MNR, y la figura de Barrientos fue central para profundizar la relación clientelar. Por su origen humilde y personalidad carismática, Barrientos conquistó al sector campesino (al punto que éste le reconociera como a su líder), haciendo posible las políticas coactivas del Pacto. A partir de este escenario de regímenes militares, el movimiento campesino atravesaría procesos de construcción y mayor articulación política, mostrándose cada vez más autónomo y presente dentro de la arena política a nivel nacional.

Un primer paso en este sentido se dio ante el plan gubernamental de Barrientos de implementar un impuesto por la propiedad individual de tierra a los campesinos. En oposición al Pacto Militar-Campesino que apoyaba dicho plan, se formó el denominado Bloque Independiente Campesino, que rápidamente se afilió a la COB.

A este primer paso de articulación autónoma la antropóloga Silvia Cusicanqui suma otros dos procesos de importancia: el sindicalismo de los ‘colonizadores’ y la emergencia de las corrientes políticaskataristas.

Los ‘colonizadores’ responden a las poblaciones que migraron (ex mineros) en busca de tierras, sobre todo a las zonas tropicales en Santa Cruz, Alto Beni (La Paz) y el Chapare (Cochabamba). Sus integrantes asumieron rápidamente conciencia de los efectos negativos de las políticas capitalistas para el desarrollo del agro (Cusicanqui, s.f.: 176) (2). De esa conciencia emergen formas de organización más autónomas, siguiendo el formato de sindicatos pero desvinculados del aparato sindical oficialista, resultando luego en la conformación de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), de la que trataremos con mayor detalle más adelante.

La preponderancia del pueblo aymara en el desarrollo de una conciencia política indígena debe ser subrayada. El actual mundo aymara consiste en realidad de la unificación de una diversidad de pueblos en torno a una lengua común, siendo la conquista española el acontecimiento de mayor impacto para su integración (Makaran-Kubis, 2009: 47).

Este hecho es significativo ya que muestra el largo recorrido del movimiento indígena. Efectivamente, ya en el periodo colonial se puede observar la formación de un frente común indígena con máximas expresiones en los levantamientos indios de la ‘Gran Rebelión’ altoperuana entre 1779 y 1781. El más importante de estos levantamientos fue el liderado por Túpac Katari (3), que da origen al nombre de la ideología y movimiento *katarista*.

Como corriente política tuvo sus inicios a fines de los años sesenta y principios de los años setenta. Fue una concepción impulsada por una élite intelectual-sindical de migrantes aymaras en la ciudad de La Paz; y tiene sus vertientes teóricas más

(2) La creciente subordinación de la economía familiar campesina a la estructura monopólica del mercado y la formación de un semiproletariado agrícola, pobre en tierras y recursos, que alimentaba el crecimiento de la economía empresarial de la caña de azúcar, algodón, coca, soya, etc.

(3) Se trata aquí de una de las figuras centrales del movimiento indígena. Julián Apasa se hizo llamar Túpac Katari, tomando parte de los nombres del cuzqueño Túpac Amaru –quien dirigía la insurrección en Cuzco- y del chayanteño Tomás Katari –uno de los primeros líderes de los levantamientos en el Alto Perú. De esta manera, en su nombre se simbolizaba la unidad del movimiento indígena andino. Túpac Katari fue derrotado y ejecutado en 1781. Sus últimas palabras ‘A mí sólo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones’ adoptaron un carácter profético al ser retomadas por el actual movimiento indígena. Así resalta la continuidad en el tiempo de la lucha indígena. Durante el periodo republicano las reformas liberales que favorecían el latifundio activaron nuevamente una resistencia indígena aymara, con una expresión clara en el levantamiento de Pablo Zárate Willka en 1899. Las políticas integracionistas de la república si lograron la sustitución de una identidad de ‘casta racializada’ por una de clase marginada (Makaran-Kubis, 2009: 48-50).Cómo se verá más adelante, la enajenación del componente étnico en el sujeto político ‘campesino’ formó una de las bases principales para la Revolución Nacional de 1952.

importantes en los escritos del indianista Fausto Reynaga (4), un teórico que propugnaba el retorno a formas de organización, producción y gobierno propias del imperio incaico. El surgimiento del katarismo se debe en parte a la frustración de la realización parcial de muchas de las promesas de ciudadanía e igualdad de la revolución del '52 para la población campesina. La migración de jóvenes del campo a las áreas urbanas, particularmente de aymaras que accedieron a una educación superior en la ciudad de La Paz, visibilizó la posición subalterna y discriminada de los indios e hizo posible el desarrollo de una conciencia de identidad, reivindicando su cultura e historia.

Como explica Albó (2008), el movimiento *katarista* logró expandirse rápidamente por su atinada decisión de insertarse en la organización dominante de ‘sindicato campesino’, aunque éste se encontrara bajo la tutela del Pacto Militar-Campesino. En cuestión de meses, el liderazgo *katarista* pudo alcanzar los más altos niveles nacionales. La apertura democrática que representaron las breves presidencias de Ovando y Torres (1969-1971), propiciaron la renovación de la dirigencia de la CNTCB por líderes más conscientes de una identidad campesina, tomando al líder *katarista* Jenaro Flores como máxima autoridad de esta organización.

A pesar de los intentos realizados por Flores de conectar al sindicalismo campesino con el movimiento obrero, el recuerdo del Pacto Militar-Campesino y el discurso ‘indianista’ del *katarismo* contribuían a generar un escepticismo y desconfianza por parte de los obreros hacia este creciente actor popular. Como explica Hervé do Alto, el *katarismo* no sólo cuestionaba la contradicción fundamental capital/trabajo del análisis marxista, sino que mantenía un discurso que podía interpretarse como un ‘racismo al revés’ (citado en Svampa *et al.*, 2007: 20). Por ello, los diversos sectores populares no pudieron formar una alianza popular en la breve apertura democrática de principios de los setenta.

En 1971, con la llegada de Bánzer al poder, Flores sería exiliado. La persecución a las organizaciones sociales, a los partidos políticos de izquierda, a los sindicatos y a todo lo que constituía oposición a esa dictadura, terminó debilitando también a la incipiente organización campesina independiente. Pero, justamente en respuesta a la represión, se levantaría un movimiento campesino sindical más fuerte y de mayor experiencia en términos políticos. Flores retornaría clandestinamente de su exilio en Chile en 1972, más consciente de la importancia de una alianza con los trabajadores, decidido a emprender la reorganización subterránea del sindicalismo de base, siendo su trabajo más importante la formación de jóvenes cuadros sindicales (Hurtado, 1986: 273). Un hito determinante en este proceso de fortalecimiento de una organización campesina independiente del pacto con los militares fue la ‘masacre del Valle’ en 1974. Este enfrentamiento dejó en claro que los intentos del régimen Banzerista de restablecer

(4) Para un análisis más detallado del pensamiento de Fausto Reinaga en relación a las expresiones kataristas más recientes véase también Escárzaga, 2011.

el Pacto Militar-Campesino eran inútiles, mientras que el movimiento campesino independiente continuaba fortaleciéndose. Así, en 1977, la dirección de la CNTCB fue asumida de facto por Jenaro Flores y otros dirigentes, en abierto desafío a la cúpula reconocida por el gobierno.

Las luchas del movimiento campesino *katarista* lograron en 1979 el reconocimiento de la COB, que permitió su ingreso en su V Congreso (pese a la oposición de algunos partidos marxistas) y resolvió llamar a la unificación campesina. De esa iniciativa surgiría la actual Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como la unificación de distintas organizaciones campesinas, poniendo final definitivo al Pacto Militar-Campesino. A partir de ese momento, la Confederación pasó a ser un espacio de organización indígena-campesina de alto nivel.

El proceso de articulación política del movimiento campesino a través de un discurso *katarista*, no puede concebirse sin el papel decisivo de su máximo líder, Jenaro Flores. Si bien su partido político (5) no logró captar el voto fuera de la base regional aymara –reservándole un espacio limitado desde esa perspectiva– el *katarismo* conquistó otros espacios más importantes. Efectivamente, Jenaro Flores inició una campaña a favor de la renovación de las dirigencias por cuadros más jóvenes e independientes de la cooptación tradicional, conquistando la cúpula de la organización sindical campesina (de CNTCB a CSUTCB). Como líder de la CSUTCB logró su consolidación como organización campesina independiente, al mismo tiempo que –reconociendo la importancia del movimiento obrero– tuvo un importante papel en lograr el reconocimiento real y la alianza con la COB.

Desde estas plataformas nacionales, el movimiento *katarista* llegó a tener una fuerte influencia en el ámbito político, primero en resistencia a la dictadura y coadyuvando al retorno de la democracia, pero también como una primera formación política del movimiento indígena de manera más integral y articulada hacia el ámbito nacional. Esto muestra también la relatividad del fracaso electoral de sus expresiones partidarias, habiéndose fraccionado en una decena y obteniendo bajos niveles de la votación (Madrid, 2008), dados los distintos escenarios políticos en Bolivia (cooptación, dictadura, crisis de legitimidad) en los que el partido político no se presenta como el medio eficiente y/o real de participación política.

(5) Desde sus inicios, el *katarismo* se dividió en dos corrientes importantes: la primera enfatizaba el aspecto indigenista desde un contenido racial, en la forma de la lucha india, repitiendo el discurso ortodoxo indianista de Fausto Reynaga; la segunda, no abandonaba el planteamiento indigenista, pero formulaba el problema campesino desde un enfoque nacional y de clase. Hacia 1978 la diferencia entre ambas corrientes se hacía más grande, al igual que la necesidad de incursionar de manera más directa en el ámbito político. De tal manera, aprovechando la apertura democrática que anunciaba el régimen Banzerista, el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA) se conformaría como partido político representando a la primera corriente, mientras que Jenaro Flores organizaría el mismo año el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari (MRTK), como expresión partidaria de la segunda.

La ascendencia del movimiento campesino se expresa concretamente en la creación de la CSUTCB y su ingreso en la Central Obrera Bolivia, como también en el hecho que Jenaro Flores en su momento llega a asumir el liderazgo de la COB —en el importante periodo de transición democrática bajo la dictadura de García Meza— convirtiéndose en el primer indígena en ocupar la dirigencia nacional de esta organización.

De esta manera, el *katarismo* logró revertir el análisis dominante de clase pregonado por la COB, en el cual el campesinado ocupaba sólo un rol de retaguardia, para proyectar al movimiento campesino de manera central en el ámbito político nacional.

A pesar de haberse constituido como la organización campesina independiente y más importante del país, la CSUTCB sufrió ciertas dificultades en sus inicios. Como explica Ströbele-Gregor, la CSUTCB no logró liberarse del todo de las prácticas y de la retórica de la política cultura dominante. La estructuración de la Confederación fue efectuada a imagen y semejanza de la COB, con base en una organización piramidal que procuró, al menos hasta mediados de los años ochenta, un control desde arriba de la población indígena. Esta jerarquía sindical no daba cabida a las distintas formas de liderazgos locales ligados a prácticas religiosas y sociales, determinando que la CSUTCB fuese en sus inicios una organización paraguas que representaba sobre todo a los campesinos como sector económico, es decir como microproductores rurales, y no tanto como a indígenas (Ströbele-Gregor, 1994; Hahn, 1996).

Sin embargo, el movimiento campesino continuaría su articulación a causa de distintos factores. Como se ha señalado, después de la caída de la UDP, Víctor Paz Estenssoro fue elegido como presidente a la cabeza del MNR. En un giro paradójico de la historia, su gobierno terminaría por revertir completamente las reformas y logros del Estado del '52, del que había sido autor protagónico en el primer gobierno revolucionario del MNR, concretamente con la adopción del famoso decreto 21060. Con el objetivo de lograr la estabilización económica, se privatizó la economía y se la liberó el mercado, se cerraron las empresas estatales (con el consecuente despido de miles de trabajadores) y se abrió el ingreso a las multinacionales.

El Nuevo Plan Económico fue exitoso en estabilizar la economía, pero fue particularmente desastroso en términos sociales para los sectores populares de la población.

Estos cambios no sólo disminuyeron notablemente el número de trabajadores asalariados (en desmedro de la posición de la COB) sino que empujaron el crecimiento del sector informal. Este último coadyuvó a la emergencia de una diversidad de pequeñas organizaciones urbanas caracterizadas por su precariedad de trabajo y por la falta de servicios básicos, en las que tenían un significativo peso los migrantes de origen rural (Albo, 2008: 45).

La importancia de este grupo se vería expresada políticamente hacia fines de los ochenta con la creación y rápida ascendencia de partidos políticos de corte po-

pulista, como CONDEPA y UCS (6). En suma, en el contexto de políticas económicas con un alto costo social, la desarticulación del movimiento obrero y la deslegitimación que la izquierda tradicional había sufrido durante el gobierno de la UDP, crearon un vacío ‘ideológico’ (Ströbele-Gregor, 1994: 112) o político, abriendo un espacio para que el movimiento indígena pudiera irrumpir con una alternativa propia.

De tal modo, el periodo 1980-1990 significa la desarticulación de la organización popular de alcance nacional y de corte sindicalista, la COB, por ‘nuevos movimientos sociales’ de carácter más local y en el cual la identidad, en particular en el *katarismo*, empieza a jugar un papel cada vez más importante en la articulación del movimiento.

2.2 Neoliberalismo y la articulación política de los movimientos sociales: la creación del ‘instrumento político’ (1990-2000)

La irrupción del movimiento indígena en el ámbito político puede ser entendida desde el concepto de ‘políticas culturales’ (ver sección 1.2.2 del capítulo 1), en el que las luchas centrales de los movimientos sociales son entendidas como una lucha por redefinir el significado y los límites del sistema político mismo. En esta sección se observa el papel central que jugó el movimiento cocalero para la articulación política de una diversidad de movimientos sociales a nivel nacional. La lucha de dicho movimiento en defensa de la hoja de coca, que en el discurso del movimiento social se articula cada vez más como una práctica cultural, se entiende efectivamente como una expresión de dichas ‘políticas culturales’ características de los nuevos movimientos sociales.

(6) En 1988 se fundó el partido político Conciencia de Patria (CONDEPA), liderado por Carlos Palenque Avilés quien había incursionado en la esfera pública primero como músico folklórico y después como presentador en la televisión. Su programa ‘La Tribuna Libre del Pueblo’ le convirtió en una figura reconocida en los sectores populares, prestando atención directa e íntima a los problemas cotidianos, haciendo un trabajo social limitado pero real. CONDEPA retomaría en parte la herencia del nacionalismo-revolucionario, pero recalcaría además el valor de las culturas populares a tiempo de atacar tibiamente el modelo económico liberal. También en 1988 se fundó el partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS), bajo el liderazgo de Max Fernández, quien trabajó en el comercio de cerveza, logrando acumular una fortuna hasta convertirse en principal accionista de la Cervecería Boliviana Nacional. Desde esa posición incursionó en la ayuda social, marcando la diferencia de capacidades con el Estado en la solución a problemas concretos de, por ejemplo, infraestructura. Por esta razón, se decidiría finalmente a irrumpir en el ámbito político. Ambos partidos tienen en común su predicamento en los sectores urbanos ligados a la economía informal a los que el Estado no llegaba, formando una alternativa a las formas más tradicionales de representación como eran los sindicatos. Se caracterizaron además por su pragmatismo y consecuente enfoque en problemas concretos de soluciones simples, juzgando la dureza de los proyectos neoliberales (Romero Ballivian, 2003).

2.2.1 Hacia una articulación a nivel nacional: el movimiento cocalero

El movimiento campesino recibió también un impulso con la centralidad que adoptaría el movimiento cocalero hacia fines de la década de los ochenta. Uno de los efectos de los planes de austeridad del gobierno neoliberal de Paz Estenssoro fue el asentamiento de gran cantidad de familias en la zona del Chapare, en su mayoría de mineros despedidos, que comenzaron a cultivar la altamente rentable hoja de coca. El boom que había tenido la industria de la droga durante la ‘narcodictadura’ de García Meza estaba relacionado con la creciente demanda de cocaína en los mercados internacionales del Norte. Una de las leyes del libre mercado preconizada por el flamante gobierno de Víctor Paz Estenssoro se cumplía: el cultivo de coca pasó a ser la única alternativa real de subsistencia para muchos.

La considerable expansión de los cultivos de la hoja milenaria fue respondida por el gobierno con el llamado ‘Plan trienal de lucha contra el narcotráfico’ en 1986. La expansión debía impedirse a través de la militarización de la zona, que al mismo tiempo debía erradicar cocales considerados ilegales (fuera de áreas tradicionales de cultivo) y con el control de mercado. El plan proyectaba también la implementación paralela de proyectos de ‘erradicación compensada de cocales’ y la ejecución de proyectos agropecuarios de ‘sustitución de cultivos’ (Gutiérrez Aguilar, 2008: 179-181).

En 1988 se promulgó la Ley de Régimen de la Coca y Sustancia Controladas, conocida como la ‘Ley 1008’; entre cuyas disposiciones, destacaba la aberración jurídica de considerar culpable a un acusado de narcotráfico, en tanto no pudiera demostrar... ¡su inocencia! El movimiento cocalero se desenvolvería en torno a la lucha contra estas medidas, que castigaron particularmente a campesinos. Lo hizo a través de la organización de sindicatos—con capacidad de movilización y resistencia— que defendían su fuente de subsistencia ya que el desarrollo alternativo no se presentaba como una opción verdadera. Desde entonces, el movimiento centraría su accionar en dos temas: el rechazo a la erradicación y el carácter ‘sagrado’ de la hoja de coca como herencia ancestral. Durante la década de los noventa, el movimiento cocalero combinó una multiplicidad de estrategias, discursos y formas organizativas en una constante confrontación con los sucesivos gobiernos, consolidándose como una fuerza social y política, diferenciada y autónoma (Gutiérrez Aguilar, 2008: 383-389).

La organización estructural del movimiento cocalero empieza con la creación de federaciones de sindicatos a partir de los años sesenta. Después de una serie de divisiones y procesos de reorganización, finalmente se consolidarían seis federaciones de cocaleros. Estas organizaciones no se afilian a la Federación Única de Cochabamba, sino directamente a las organizaciones campesinas de nivel nacional. De esta manera, cuatro se afilian a la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), y otras dos a la CSUTCB. Hacia fines de los ochenta funcionaría una serie de comités de coordinación. En 1992 se crea finalmente la Coordinadora de las seis

Federaciones del Trópico cochabambino. Gutiérrez Aguilar explica que la Coordinadora ‘aprovecha la tradición y experiencia del sindicalismo agrario y minero, pero no se ajusta exactamente al modelo de agregación y organización representado por la CSUTCB, sobre todo en la región occidental del país’ (2008: 188).

Con base en esta modalidad organizativa, el movimiento cocalero fue ganando espacio en estas organizaciones de nivel nacional, al punto de convertirse en la fuerza social más importante dentro del movimiento campesino-indígena, despojando al *katarismo* de su liderazgo en la CSUTCB. Desde esa posición, el movimiento cocalero pudo expandir su influencia hacia la Central Obrera Boliviana que, en repetidas ocasiones, representó los intereses cocaleros en su interpelación al Estado.

La ascensión del movimiento cocalero puede entenderse como la expresión de una lectura más cultural de las diferencias sociales y de la lucha popular. Desde las plataformas nacionales, el movimiento cocalero logró su inserción en un marco político nacional. Primero la coca fue proyectada como sinónimo de la cultura andina, con lo que se argumentaba que su erradicación por fuerzas externas significaba la destrucción de un modo de vida y legacia cultural, que se traducían, además, en un discurso antiimperialista. Esta lectura consagró al apoyo de las regiones de Chuquisaca, Potosí y Oruro, departamentos donde el masticado (*acullico*) de coca pertenece efectivamente a las costumbres tradicionales. En la medida en que el cultivo de coca significaba techo y comida para familias, su defensa se articulaba en oposición a los efectos negativos de las políticas neoliberales. Además, el papel del gobierno de Estados Unidos en la llamada “lucha contra el narcotráfico” (7) coadyuvó a la integración de una retórica nacionalista en la que la hoja de coca pasó a ser ‘el símbolo de la defensa de la dignidad nacional y su memoria, así como de la soberanía frente a Estados Unidos, convirtiéndola en un tema de importancia nacional’ (Castillo Gallardo, 2004: 5). Desde este punto, el discurso en defensa de la hoja de coca pudo apelar y sensibilizar a otros sectores, llegando a interpelar a actores urbanos, como estudiantes y profesionales progresistas, expandiendo su influencia más allá de los espacios sindicales.

2.2.2 Incursión del movimiento social en el ámbito político: la Ley Participación Popular y la creación del ‘instrumento político’

La capacidad del movimiento cocalero de expandir su discurso a nivel nacional debe ser entendida también en el marco de una serie de reformas políticas rea-

(7) En este sentido se hacía especial referencia a la presencia de la DEA (Drug Enforcement Agency) y sus agentes en Bolivia, a las operaciones militares conjuntas, su injerencia en el diseño de las leyes anti-coca, y la creación de UMOPAR (Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales). La UMOPAR era especialmente problemática, ya que no sólo era financiada y dirigida por lo DEA, sino que en variadas ocasiones las confrontaciones con los cocaleros resultaron en un uso desmedido de violencia y prácticas de tortura, violando los Derechos Humanos (Healy, 1991).

lizadas en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); en particular, la Ley de Participación Popular promulgada en 1994 (8). La importancia de esta ley radica en que permitió una apertura del espacio de participación política, al volver elegibles a las autoridades municipales de las capitales de provincia. En este sentido, las reformas legales y constitucionales de los años '90 pueden entenderse como ‘oportunidades políticas’ (McAdam *et al.*, 1996) sin las cuales no se puede entender la articulación de los movimientos sociales.

A pesar de todas las dificultades y retrocesos de la Ley (9), desde 1994, muchas organizaciones campesinas comenzaron a participar en las elecciones locales. Los cocaleros presentarían el esfuerzo más sistemático por construir una organización política ligada a la estructura sindical agraria (10), y serían la fuerza social más exitosa en conquistar estos espacios de poder locales para, desde esa posición, proyectarse hacia la política nacional. Este desarrollo marcaría el comienzo de un nuevo experimento de incursión política por parte del movimiento social indígena-campesino.

(8) La LPP creó gobiernos locales en áreas rurales y ordenó la elección directa de oficiales municipales, la redistribución del 20% de los ingresos tributarios nacionales entre las municipalidades, y la creación de comités de vigilancia y consejos para el diseño y control del gasto municipal. La Ley tenía el objetivo de incrementar la autonomía y el poder político de los gobiernos locales, al mismo tiempo de expandir la jurisdicción municipal (hasta entonces restringida al área urbana) hacia el interior de las provincias para llegar a las poblaciones indígenas y rurales de la periferia. La Ley establecía también mecanismos de participación para estos sectores de la población, al igual que un ‘control social’ más efectivo por parte de las organizaciones de base. Todo el diseño, promoción e implementación de la ley fue ejecutado por académicos, intelectuales y antiguos activistas de ONG, quienes alabaron el proyecto como un marco legal para la consolidación de la sociedad civil y el protagonismo de una ciudadanía activa y responsable. Para muchos, fue considerada la “cara social” y amable del neoliberalismo (Medeiros, 2001).

(9) Antes de la LLP las comunidades indígenas no conocían ningún tipo de reconocimiento legal por parte del Estado, haciendo a la organización sindical la única forma de obtener un estatus legal. Si bien la LPP proyectaba solucionar este problema, el trámite de personería jurídica era moroso y costoso. Los procesos de certificación produjeron conflictos de poder entre grupos locales, y muchas veces las solicitudes de trámites eran negadas por funcionarios civiles locales, ya que el reconocimiento legal confería varios derechos, entre ellos, a titulaciones de tierra como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Territorios Indígenas.

(10) Además, los procesos de ordenamiento de municipalidades implicaban una lógica administrativa para la organización del espacio y la población, haciendo que el ejercicio de la política continuara sujeto a la lógica de planificación municipal. En este sentido, Medeiros concluye que el espacio político permaneció regulado por tecnologías desarrollistas, en las que los problemas sociales eran definidos en términos técnicos y, por lo tanto, recibían soluciones técnicas. Por ello, la participación efectiva quedaba condicionada al manejo de un vocabulario por lo general ajeno a las poblaciones indígenas y rurales. Allí donde las organizaciones sociales eran fuertes y contaban con el respaldo técnico de ONGs, las experiencias fueron mejores; pero para la gran mayoría el desarrollismo implícito en la Ley sirvió para mantener los esquemas de exclusión. Una crítica aún más severa arguye que la LPP no era más que una ‘mascarada social’ para vender el modelo (económico) del neoliberalismo. (Medeiros, 2001; Kohl y Farthing, 2007: 235-237).

El contexto en el que se promulga la Ley de Participación Popular se caracterizó por la convergencia de procesos internacionales e internos que facilitaron la articulación política del movimiento indígena. Por un lado, los pueblos indígenas de tierras bajas empezaron a abrirse espacio en la arena nacional, buscando su lugar al lado de las organizaciones indígenas más poderosas de tierras altas. Hacia finales de los años setenta, por iniciativa del entonces Capitán Grande guaraní, Mburuvichaguasu Bonifacio Barrientos Iyambae, también llamado ‘Sombra Grande’, comienza la unificación de los pueblos indígenas de tierras bajas. Este proceso recibió además un importante estímulo por parte de ONG y antropólogos, que apoyaron el proceso organizativo a través del cual, con el retorno de la democracia, se fundó la Confederación Indígena del Oriente Boliviana (CIDOB) en 1982. En principio, la CIDOB agrupaba a cinco pueblos indígenas –Guaraní, Izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos. Durante la década de los ochenta, la CIDOB fue articulando las emergentes y diversas organizaciones de pueblos indígenas de tierras bajas; entre ellas, la Central de Cabildos Indígenas Mojeños en Trinidad y la Central de Pueblos Indígenas del Beni, en una suerte de coordinadora (Postero, 2005: 274-275; Albó, 2008: 41-42; García Linera *et al.*, 2010: 217-219).

La CIDOB comenzaría a posicionarse como organización indígena de nivel nacional con la realización de la ‘Marcha por el Territorio y la Dignidad’ en 1990. Dicha marcha fue una iniciativa de los pueblos indígenas del Beni en defensa de sus territorios ante la invasión de ganaderos y madereros. La marcha partió del Oriente del país hacia la capital, movilizando a unas 800 personas durante 34 días, logrando una gran cobertura mediática y mucha simpatía entre los sectores urbanos. Esto obligó al entonces presidente Jaime Paz Zamora, a acceder al diálogo y a la concesión de una serie de demandas. Probablemente los logros más importantes fueron, sin embargo, la visibilización de los pueblos indígenas de tierras bajas en el ámbito nacional, y los lazos que se sellaron con su contraparte andina la CSUTCB, que organizó el recibimiento a los marchistas. Este proceso terminaría por cerrarse en los encuentros preparatorios en el continente en víspera del 12 de octubre de 1992, cuando el movimiento indígena latinoamericano conmemoraría ‘500 años de resistencia’ en oposición a la ‘celebración de los 500 años del descubrimiento de América’ (Albo, 2008: 43).

Durante la década de los noventa, el movimiento indígena continuaría conquistando espacios políticos. Una expresión de ello fue el ejercicio de la Vicepresidencia de la República por parte del líder indígena katarista, Víctor Hugo Cárdenas –en el periodo 1993-1997– hecho que ilustra la creciente articulación política del movimiento indígena.

Por un lado, el hecho de que el MNR seleccionara a Cárdenas como su candidato a la vicepresidencia –para formar el binomio con Sánchez de Lozada– mostraba que la población indígena empezaba a ser reconocida dentro del espacio político. La veloz ascensión de partidos de corte populista a principios de los noventa, que apelaban a los sectores urbanos con un fuerte componente de migrantes aymaras, dejaba en claro

que los costos sociales de la estabilización económica afectaban en particular a segmentos de la población con una creciente identificación étnica. En ese sentido, los partidos tradicionales vieron la necesidad de permitir aperturas y concesiones hacia el movimiento indígena. Por otro lado, la candidatura de Cárdenas fue recibida con rechazo por el propio katarismo, como también por la dirigencia de la izquierda política y sindical –actores que habían estado trabajando en la construcción de un movimiento socialista en torno a la figura de este líder indígena. Para ellos, la candidatura significaba no sólo el truncamiento de ese proyecto, sino también un nuevo éxito de la política tradicional en cooptar y desarmar el movimiento *katarista* (Laserna, 1993).

Sea cual fuere el caso, la aceptación a la propuesta del MNR, deja en claro que en ese momento el movimiento indígena no estaba lo suficientemente articulado como para incursionar en la esfera política de forma autónoma, remitiéndose nuevamente a un papel secundario detrás de un partido tradicional.

Desde su posición privilegiada Cárdenas coadyuvó a la aprobación de una serie de reformas a favor de los pueblos indígenas. Así, en 1994 a través de una reforma constitucional se reconocía el carácter multiétnico y pluricultural del país, al mismo tiempo que se incorporaba la figura de Tierra Comunitaria de Origen TCO, con los atributos de territorios de pueblos indígenas tal como estaban previstos en el Convenio 169 de la OIT. Ese mismo año se promulgó también la Ley de Reforma Educativa, cuya importancia radicaba en la integración de principios de interculturalidad y bilingüismo, rompiendo definitivamente con las políticas de ‘asimilación’ y ‘mestizaje’ anteriores. Nuevamente, estas políticas pueden ser entendidas dentro de un marco de visibilización de la cuestión indígena, en parte gracias a los logros políticos de las organizaciones indígenas de tierras bajas y en parte siguiendo la tendencia en el resto del continente.

Un tercer factor del contexto en el que se promulga la Ley de Participación Popular es el ritmo acelerado de ‘globalización neoliberal’ (Aart Scholte, 2005) durante los noventa, del que Bolivia no sería excepción. Efectivamente, las reformas interculturales formaban parte de un paquete de políticas destinadas a establecer un régimen hegemónico neoliberal a escala nacional. Como explica Silva, el neoliberalismo en América Latina implica la despolitización de la economía, la restricción del Estado a ‘asuntos estatales’ de manera que los ‘asuntos sociales’ no tienen cabida. La orientación hacia el mercado conlleva un entendimiento de la democracia en la que toma de decisiones de nivel macro es delegada a un grupo tecnócrata de administradores de Estado –sintonizados con sus pares en instancias multilaterales–, y en la que las políticas sociales son sometidas a las lógicas del mercado (Silva, 1999). Revisando el caso de Bo-

(11) Durante los años ochenta y noventa países como Ecuador, Colombia y México implementaron reformas constitucionales en reconocimiento de sus poblaciones indígenas (Gustafson, 2002).

livia, Medeiros sostiene que el proceso de ‘democratización’ a partir de 1985 conllevó efectivamente una tendencia hacia una separación entre lo social y lo político, y a desligar la lucha por el reconocimiento étnico de la lucha por la redistribución económica (Medeiros, 2001: 410).

Si bien las políticas neoliberales produjeron tasas de crecimiento positivas (particularmente en los primeros años de los noventa), lo cierto es que la distribución del ingreso se volvió cada vez más desigual. Un estudio de la CEPAL de 2003 sobre la desigualdad en América Latina comprobaba que durante la década de los noventa la desigualdad en Bolivia aumentó, y que si el desarrollo económico se proyectara hacia el futuro sin cambio alguno, la pobreza seguiría aumentando (CEPAL, 2003: 3). Este dato es significativo en la medida en que muestra que la estabilización económica se dio en gran parte a costa del desarrollo social –en un proyecto político en el que el Estado disminuía su responsabilidad sobre temas sociales– al mismo tiempo de requerir una activación de los actores de la sociedad para la solución del deterioro de su situación.

En la Ley de Participación Popular esto se traducía en una descentralización del cuerpo estatal a través del fortalecimiento del nivel municipal, al que se le transfería mayores competencias, mayor independencia administrativa y recursos económicos a estos gobiernos locales. Al mismo tiempo, como explica Medeiros, la Ley se enmarcaba en un discurso particular en torno a la ‘sociedad civil’ que prescribía un cierto tipo de relación Estado-Sociedad congruente con el proyecto neoliberal (Medeiros, 2001). En él, la ciudadanía asumía un papel más activo a través de la participación política a nivel local.

El componente cultural de la Ley se veía expresado en el reconocimiento jurídico de las comunidades originarias, abarcando a toda la diversidad de formas de organización bajo el genérico de Organizaciones Territoriales de Base OTBs. Antes de las reformas constitucionales de 1994, las comunidades indígenas no habían sido reconocidas como tales por el Estado y el antiguo marco legal no concebía a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. El aparato estatal consideraba al indígena como ‘campesino’ y, en consecuencia, la ‘personería jurídica’ era otorgada bajo el Código Civil en calidad de comunidad campesina, sindicato o asociación. Como ésta era la única manera de conseguir el reconocimiento legal, la necesidad de poseer ‘personería jurídica’ produjo que muchas comunidades propiamente indígenas fueran clasificadas como comunidades campesinas. Con la LPP, con muchas tensiones y obstáculos, se hizo posible la rectificación de tales clasificaciones de acuerdo a identidades culturales. (12)

(12) El reconocimiento de las organizaciones indígenas conllevaba una serie de derechos, como la legitimación de estructuras tradicionales de gobierno indígena, derechos territoriales y la transferencia del 10 por ciento del presupuesto general. Justamente por ello, la certificación como OTB fue muchas veces obstaculizada por autoridades como gobiernos municipales y subpre-

Como explica Albó, en un principio muchas organizaciones de base percibieron la Ley con cierta desconfianza, temiendo que las OTBs se convirtieran en otra instancia más para un control estatal de las organizaciones de base (Albó, 2008: 50-51). Este era el caso, por ejemplo, de la CSUTCB, que veía en la Ley un instrumento para socavar las organizaciones sindicales campesinas. Esta hipótesis no estaba muy alejada de la realidad, si se considera que durante la elaboración de la Ley se excluyó a la organización sindical como aspirante a OTB. Ciertamente, el referente espacial era efectivo en excluir a toda organización en torno a intereses sectoriales. Así, la LPP efectuaba una reorganización de la geografía ‘parcelando las asociaciones y vínculos comunitarios y populares existentes, e imponiendo formas de control y gestión del territorio más manejables para tecnócratas y administradores públicos y privados’ (Gutiérrez Aguilar, 2008:193). De esta manera la Ley era ‘instrumental’ (Gustafson, 2002: 276) al objetivo de hegemonía neoliberal en la medida en la que no sólo despolitizaba la demanda social, sino que la desarticulaba de un nivel nacional a espacios locales y controlados de participación.

Sin embargo, para el movimiento cocalero en particular, la LPP significó un reforzamiento político. La criminalización de su principal actividad económica y la constante confrontación durante más de diez años ya habían facilitado acumular una gran experiencia política que ahora encontraba un espacio político ‘reconocido’ de acción en los gobiernos democráticos locales. Los sindicatos organizados en federaciones obtuvieron así aún mayor legitimidad cuando pasaron a ocupar los gobiernos municipales del Chapare después de las elecciones de 1995. Los representantes que recibían el voto masivo de la región, no eran sino los dirigentes sindicales para quienes la participación electoral se presentaba como una manera más de resistencia a las políticas anti-coca del gobierno central. El voto se tornó así en el medio de expresión de rechazo de tales políticas, produciendo en las elecciones subsecuentes sin excepción representantes provenientes de los sindicatos cocaleros (Gutiérrez Aguilar, 2008: 196-197; Kohl y Farthing, 2007: 252).

De esa forma, el carácter ‘instrumental’ que de principio tenía la Ley de Participación Popular, a la larga, mostraría efectos opuestos. Paulatinamente, la Ley

fecturas quienes percibían una tensión entre la transferencia de derechos y los propios intereses territoriales y presupuestarios. El proceso de certificación producía conflictos con grupos locales de poder incrustados en agencias oficiales, los cuales tenían la tendencia a negar la existencia de pueblos indígenas porque tales credenciales hacían posible la demanda de *Tierras Comunitarias de Origen o Territorios Indígenas*; así como también el acceso a otros derechos establecidos por la ley. Asimismo, otra dificultad se presentaba en relación a la existencia de más de un tipo de organización indígena tradicional –por ejemplo, allí donde ayllus y organizaciones sindicales funcionaban de forma simultánea–, la vinculación entre el tamaño de la población y los recursos disponibles –provocando o atizando conflictos territoriales–, y a organizaciones que representaban sectores distintos dentro de un mismo espacio físico (Orellana Halkyyer, 2008: 190; Calla, 2008: 78-80).

fue acogida por el potencial que proponía una participación política directa, con una incursión por parte de dirigentes locales de organizaciones como la CSUTCB y la CIDOB en las instancias municipales, con lo que las organizaciones de base perdían temporalmente a sus líderes, pero que finalmente les serían devueltos con una renovada experiencia política. En este punto vale la pena mencionar la posición de Patzi, que ve en este proceso ‘un ensanchamiento ideológico del Estado paralelo a un vaciamiento ideológico indígena’ en el que la participación política indígena sirve para ‘reproducir los esquemas de dominación existentes creados por la clase dominante’ al incorporar nuevamente al movimiento ‘a nuevas formas de dominación estatal’.

Sin embargo, a nuestro parecer esta lectura es sólo parcial. La posición de Patzi parece presumir un indigenismo o ideología indígena ‘pura’, de la cual ciertas pautas son asumidas por el Estado para su manipulación, logrando el ‘ensanchamiento estatal’ y el ‘vaciamiento ideológico indígena’. En mi opinión, tal ideología indígena ‘pura’ no existe, o si existió alguna vez, dado el hecho colonial, perdió su esencia al estar en constante contacto e interacción con otras lógicas dominantes. Es justamente en este diálogo que las distintas lógicas o discursos se ven sometidos a procesos continuos de redefinición. En este caso particular, el Estado se redefine reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural del país –redefinición de la que la LPP forma parte– mientras que el movimiento indígena se redefine al asumir un rol político más explícito y activo.

Lo cierto es que, por un lado, la LPP fue exitosa en fragmentar la resistencia social en espacios locales, pero por otro permitió que una COB debilitada fuera relevada por una serie de movimientos sociales rurales con locus en la lucha municipal. De estas luchas destacaría el movimiento cocalero que llegaría a ser el dínamo para la movilización y articulación de una diversidad de actores, alcanzando el nivel nacional.

2.2.3 Articulación política de los movimientos sociales: la creación del ‘instrumento político’

Hacia finales de la década de los noventa, los movimientos sociales en Bolivia empezaban a ser más visibles en el espacio político que hizo posible la Ley de Participación Popular, expresado en la creación y conquistas electorales del Instrumento Político y con un papel vanguardista para el movimiento cocalero, como la organización social más exitosa en conquistar los nuevos espacios políticos formales.

En ausencia de una presencia estatal en las zonas rurales, las centrales cocaleras se fueron convirtiendo en la autoridad pública con mayor autoridad y legitimidad en sus regiones. La importancia de ello es que, a través de estas prácticas, el movimiento indígena en general y el movimiento cocalero en particular, realizaron una inserción real en el ámbito político formal. En este proceso, desde los espacios locales el movimiento cocalero emprendió una orientación política hacia la arena nacional, sirviendo así como primer un eje gravitacional en torno al cual más tarde se dará

la articulación política de otros movimientos sociales, resultando en la creación del ‘instrumento político’ y el MAS.

La idea del ‘instrumento político’ debe remitirse al *katarismo*. La experiencia de éste movimiento, descrita anteriormente, muestra que la incursión política de movimientos indígenas no era en sí una idea nueva, siendo un ejemplo claro la creación y participación de partidos como el MITKA y MRTK. Tiene, incluso, un antecedente en la creación de un partido indigenista por Fausto Reynaga, aunque éste no tuvo mayor incidencia.

La corriente *katariasta* influyó en la organización sindical a nivel nacional de una gran parte del movimiento campesino, en la forma de la CSUTCB. Como dijimos antes, justamente a raíz de esa legacia del movimiento obrero, la Confederación Sindical tuvo dificultades de conectarse orgánicamente con las bases durante sus primeros años. Sin embargo, hacia fines de los ochenta, esta organización empezaba a mostrar una mayor independencia y capacidad de acción, como lo muestra su primer Congreso Extraordinario en el año 1988. En aquella ocasión, la CSUTCB aprobó su tesis política (13) que no era otra que la tesis *katariasta*, mostrando una partida con el análisis marxista de clase y girando hacia una interpretación más cultural e identitaria.

En dicho documento se presentaba una fuerte crítica al accionar del sindicalismo y al mismo tiempo de plantear la necesidad de construir el ‘poder comunal’. Se discutía cómo debía alcanzarse dicho objetivo y la necesidad de un ‘brazo político’ que permitiera a la CSUTCB un mayor espacio de acción. Es así que ya en este congreso se propone entonces la creación de una Asamblea de las Nacionalidades que debiere encargarse de construir el Instrumento Político.

La tendencia regional que otorgaba mayor visibilidad al movimiento indígena, relacionada a la proximidad de los 500 años desde la llegada de Colón a las Américas, coadyuvó de cierta manera al crecimiento de esas primeras propuestas. En el IV Congreso de la CSUTCB en 1980, la Izquierda Unida propuso que la Asamblea de las Nacionalidades fuera instalada el 12 de octubre de 1992, en rechazo al festejo que preparaba el gobierno. En un esfuerzo por incorporar a los pueblos indígenas del oriente, se creó entonces un comité interinstitucional de los 500 años de Resistencia y Rechazo del V Centenario, compuesto por la CSUTCB, la CIDOB, los Colonizadores, además

(13) Es importante notar que esta tesis fue escrita por José Enrique Pinelo, quien en ese entonces era director de la Unión Nacional de Trabajadores por la Acción Social (UNITAS). Al parecer, la influencia de esta organización continúa siendo notable, por ejemplo a través del programa NINA y también por su asistencia en la redacción de la propuesta de la Nueva Constitución del Pacto de Unidad. Patzi explica que, durante este periodo, ante la debilitación de la izquierda obrera, los intelectuales de izquierda buscan reubicarse a la cabeza del movimiento indígena, proceso en el cual ‘el indígena pierde el protagonismo que en ciertos momentos había asumido y se convierte en participante de un movimiento subordinado a los intereses de la izquierda’ (Patzi Paco, 1999: 71).

de UNITAS y la Comisión Episcopal (14). En este sentido, tuvo gran importancia la Marcha por la Soberanía y la Dignidad en 1990, mencionada anteriormente, pues permitió el encuentro entre los pueblos indígenas del oriente con los de tierras altas.

Si bien importantes, estos primeros pasos de una articulación nacional del movimiento indígena mostraban aún indecisión y falta de claridad de objetivos. Así lo expresaría el fracaso de la Asamblea de las Nacionalidades en Octubre de 1992; después de una desordenada instalación, quedó truncada en disputas sobre su organización y facultades. El evento congregó a más de veinte mil indígenas en la capital, reunidos sobre todo para expresar su rechazo a las celebraciones del 12 de Octubre. Como explica Patzi, para parte del movimiento la Asamblea se constituiría en un mecanismo de construcción de un Estado ‘pluri-multinacional, otros veían en él un mecanismo de construcción del Estado Socialista, mientras que para los pueblos indígenas del oriente era sobre todo un espacio de encuentro y diálogo con sus contrapartes de tierras altas’ (1999: 68). Al mismo tiempo, el movimiento indígena se veía atravesado por un traspaso del liderazgo en el que los líderes aymaras eran desplazados por la dirigencia quechua mayoritariamente oriunda de Cochabamba, lo que mostraba una directa relación con la paulatina ascendencia del movimiento cocalero en el ámbito nacional.

Autores como Felix Patzi y Silvia Rivera sostienen que el movimiento indígena salió perjudicado de este primer intento de articulación política, ya que la desilusión llevó a que los dirigentes indígenas optaran por ofrecerse al Estado para la implementación de las políticas reformistas de los noventa.

Sin embargo, desde una perspectiva de un proceso largo de articulación política, este episodio sí muestra cualidades positivas. La Asamblea formó un espacio paralelo para la visibilización y la canalización de una diversidad de actores y demandas presentes en la sociedad, que no eran atendidos por el Estado. La presencia multitudinaria de los indígenas, con una clara intención de cambio, mostraba que la cuestión indígena continuaba siendo uno de los temas más importantes para el país. En otras palabras, la Asamblea dejaba en claro que el modelo de construcción de la nación a través de la ‘asimilación’ y el ideal ‘mestizo’ habían fracasado, y que así, existía una diversidad de actores y demandas que no encontraban recepción en estructuras institucionales de corte unitario que se inscribían más bien en un proyecto homogeneizador de Estado-Nación (15).

(14) Nuevamente hacemos notar aquí el papel de estas ‘organizaciones de apoyo’ de corte izquierdista y eclesiástico, que responden al contexto particular latinoamericano en el que sectores progresistas de la clase media, devenida en “sociedad civil”, forman parte de la resistencia a la represión por parte de regímenes autoritarios. Reflexionaremos sobre la relación entre estas organizaciones y los movimientos sociales indígenas más adelante.

(15) La maduración de esta idea es una de las contribuciones más importantes (sino la más importante) del movimiento indígena al proceso de redefinición del Estado en lo que más tarde se concretaría en la fórmula de ‘Estado Plurinacional’ y las correspondientes redefiniciones para la relación Estado-sociedad. Esto se tratará más en detalle en los capítulos 3 y 4.

Paralelamente, hacia fines de los ochenta, en las tierras altas del país se formaba un movimiento más radical en torno a la causa de autodeterminación de los pueblos indígenas. Se trata de los ‘Ayllus Rojos’ liderados por Felipe Quispe Huanca (‘el Mallku’). Una característica importante es que esta agrupación adoptó una modalidad de acción armada (16). Tanto la derecha como la izquierda veían en esta organización una amenaza, ya que sus reivindicaciones atentaban directamente a la integridad del país y a la construcción de la nación. Por su parte, el Estado rápidamente les calificó de terroristas y ordenó la aprehensión de sus líderes.

La importancia de los Ayllus Rojos para el movimiento indígena radica en que de manera explícita formuló uno de los puntos principales que integraría esa agenda, a saber, la reinstauración de las formas originarias de organización política con completa autodeterminación. Hasta entonces, la demanda de autodeterminación no había sido tan subrayada y la acción estaba más dirigida a una reformación del Estado para una mejor incorporación de la población indígena. Asimismo la radicalidad de la agrupación, expresada en su actividad armada, ponía nuevamente en evidencia la falta de integración de las naciones y, en consecuencia, el carácter ilusorio del Estado-Nación. Según Patzi, ésta es la razón por la cual el Estado se vio obligado a tomar las propuestas de la pluri-multiculturalidad como la ideología más apropiada para la normalización del indígena (Patzi, 1999: 84).

Es así que, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprueban reformas constitucionales destinadas al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. Como se menciona anteriormente, una de las reformas más significativas de este periodo fue la descentralización implementada a través de la Ley de Participación Popular. Junto a la ascendencia del movimiento cocalero, el movimiento indígena experimentó una transición de un carácter contestatario ante el Estado a uno de mayor participación en los nuevos espacios políticos a nivel local. En ese proceso, la idea del instrumento político iría madurando con la creación de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en el Congreso de la CSTUCB denominado ‘Tierra, Territorio e Instrumento Político’, celebrado en Santa Cruz en 1995. En esta ocasión

(16) Los ‘Ayllus Rojos’ hicieron una alianza con un grupo de estudiantes bolivianos y mexicanos. Estos se habían conocido en la Universidad Autónoma de México, apoyando primero la causa salvadoreña para después retornar a Bolivia y procurar un proceso revolucionario desde una lectura marxista. Entre ellos figuraba Álvaro García Linera, el actual vice-presidente del Estado Plurinacional. La clausura de las minas y el desplazamiento de los mineros hacia las áreas rurales, obliga a buscar la alianza con las fuerzas indígenas, en la que el grupo estudiantil combinaba el activismo con la elaboración teórica del marxismo para una adecuación a la cuestión indígena en América Latina. La alianza con la agrupación de ‘Ayllus Rojos’ produjo la creación del Ejército Guerrillero Tupac Katari, que el Estado calificó como terrorista y bajo acusación de atentados contra el Estado, tomó presa a una gran parte de su dirigencia, como fue el caso de Felipe Quispe, Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez Aguilar. Los últimos dos permanecieron encarcelados durante cinco años sin juicio, y después de su puesta en libertad los cargos fueron retirados (Escarzaga, 2012).

se plantea por primera vez la participación de este órgano en las recién creadas elecciones municipales.

La participación de organizaciones indígenas como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y la Central Indígena del Oriente de Bolivia mostraba el comienzo de la construcción de una unidad política indígena-campesina. Al mismo tiempo, si bien se proyectaba la participación en un sistema partidario, las organizaciones indígenas ponían un énfasis especial en no llamar a su nuevo órgano un ‘partido político’. Esta atención a la nomenclatura debe ser entendida en relación a las malas prácticas que las organizaciones indígenas habían experimentado en antiguas alianzas con partidos políticos –los cuales generalmente manipularon y dividieron a sus organizaciones– como también una interpelación a la crisis general de legitimidad de todo el sistema político que se empezaba a sentir en el país y en la región. La creación del ‘instrumento’ encarnaba así el deseo de participación en la arena política de forma directa –y no a través de representaciones – con algo muy diferente a un ‘partido político’.

La ASP enfrentó una serie de obstáculos desde sus inicios. Como explica Raquel Gutiérrez, por un lado, la solicitud de inscripción de la ASP en la Corte Nacional Electoral para participar en las elecciones municipales fue rechazada dos veces (17). Por otro, la ASP se había creado con la participación de una serie de organizaciones indígenas bajo el liderazgo de una CSTUCB que sentía la ascendencia política del movimiento cocalero a su interior. Es por ello que, en sus inicios, se vio marcada por fuertes contradicciones internas, particularmente por la rivalidad existente entre el dirigente departamental agrario, Alejo Véliz, y el secretario ejecutivo de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, Evo Morales (18)

Las organizaciones indígenas, si bien persistieron en conseguir una sigla política propia, bajo la influencia del movimiento cocalero, decidieron participar en las elecciones en alianza con partidos políticos registrados. Es así que la ASP participa de los comicios municipales y generales de 1995 y 1997 bajo la sigla de la Izquierda Unida. Los resultados de 1995 producen una considerable participación política en la región cocalera del Chapare, y en 1997 consiguen 4 diputados (de 130). Entre ellos, resultaría electo Evo Morales con más del 70 por ciento de la votación correspondiente a la circunscripción del Chapare, lo que lo convierte en el diputado uninominal más votado del Congreso.

(17) El rechazo es adjudicado a la interferencia por parte de los partidos políticos dominantes (ADN, MIR, MNR) en la Corte Nacional Electoral (Harten, 2011: 84).

(18) La pugna por el liderazgo del ‘instrumento’ se hace visible ya en 1997 cuando Morales junto a otros dirigentes quechuas, organiza un Segundo Congreso del Instrumento Político y Territorio en el que se constituye el Consejo de Poder Originario, organización que no llega a tener un funcionamiento significativo (Gutiérrez Aguilar, 2008: 192).

La característica geográfica de estas votaciones muestra que las victorias políticas, más que del ‘instrumento’, eran sobre todo conquistas del movimiento cocalero. Como explica Moira Zuazo, los resultados de estas elecciones fueron determinantes para la consolidación del instrumento en dos sentidos. Por un lado demostraban la factibilidad y la utilidad del ‘instrumento’ en la arena política, y de esta manera presentaban un argumento convincente a aquellas facciones que mantenían reservas respecto a la participación política. Por otro lado, reforzaba el liderazgo del movimiento cocalero en el movimiento indígena, y de su líder Evo Morales, decidiendo a su favor las pugnas por la dirigencia del ‘instrumento’ (Zuazo, 2009: 39-40).

Esta decisión se vio acompañada con un cambio de nomenclatura. Alejo Véliz se negaba a entregar el mando de la ASP a Morales, razón por lo cual –sobre un sólido apoyo mayoritario de las bases– este último optó por separarse de la ASP y proseguir el camino como Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), buscando la participación en las elecciones municipales de 1999. En este aspecto, la CNE nuevamente presentó obstáculos para esa participación, ya que no sólo rechazó la inscripción del IPSP sino que también anuló la licencia de la Izquierda Unida. Es así que el IPSP optó nuevamente por hacer uso de la sigla de un partido existente, aunque prácticamente desahuciado, el Movimiento al Socialismo (MAS), de las que ya no se despediría (19). En las palabras de un dirigente de la CSUTCB:

‘En la comisión política (de la CSUTCB) se funda el IPSP en agosto 1995. De ahí nace el IPSP, el MAS es posterior. En 1999 Morales sale como diputado, en el 2002 ya es MAS-IPSP. El cuerpo es la CSUTCB, el MAS es el brazo político.’ (20)

Las elecciones municipales de 1995 arrojaron contundentes victorias en las regiones cocaleras del país, aunque con el 3,2 por ciento del total nacional, todavía seguían siendo limitadas a nivel nacional. Desde esos espacios locales, la dirigencia continuó con la acumulación de experiencia política para presentarse con una mejor preparación para las elecciones generales del 2002, en las cuales el MAS obtuvo un sorpresivo segundo lugar, sólo unos puntos detrás del MNR. Datos posteriores y con-

(19) En la actualidad, en el MAS hay quienes recuerdan todavía el pasado falangista del partido del cual finalmente adoptaría las siglas políticas, por lo que nos parece importante mencionarlo. El MAS fue establecido en 1985; paradójicamente, como una fracción de izquierda de uno de los partidos de derecha más antiguos de Bolivia, la Falange Socialista Boliviana (FSB). Su dirigente histórico fue David Añez Pedraza, quien evolucionaría hacia la izquierda fuertemente conmovido por la guerrilla del Che Guevara y de la de Teoponte. Hacia principios de los noventa el fracaso de este proyecto se expresaba en la limitada cantidad de miembros permanentes (alrededor de una veintena). La CNE permitió el traspaso de MAS a Evo Morales, bajo la condición que ninguno de los atributos del partido (nombre, símbolos, colores) fueran cambiados (Sven Harten, 2011: 85-86).

(20) Entrevista a Leandro Belmonte, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB. La Paz, 24 de mayo de 2012.

fesiones propias señalan que, en aquella oportunidad, el MAS habría ya sacado el primer lugar de la preferencia electoral.

Cómo se explica la victoria electoral del MAS del 2002? La causa de esta creciente conquista de mayores electorados a nivel nacional no puede ser buscada únicamente en el ámbito de las organizaciones indígenas-campesinas y su instrumento político. Es necesario tomar en cuenta el contexto socio político estructural y coyuntural que forman el escenario de dicha ascensión política. En el siguiente apartado prestamos atención a este contexto.

2.3 Protagonismo del nuevo actor político ‘movimiento social’: la crisis de legitimidad del sistema político y el ciclo de movilizaciones

Como hemos visto, las organizaciones indígenas campesinas han atravesado por un proceso de articulación política que resulta en la creación de su instrumento político y en su incursión en el ámbito político formal, primero a nivel local para expandirse y llegar al nivel nacional. Esta creciente inserción en la política nacional está relacionada a un contexto sociopolítico estructural y coyuntural, a saber una crisis de legitimidad del sistema político y la insurgencia social que caracterizó el periodo 2000-2005. Fruto de estos procesos el movimiento social obtiene una incidencia política cada vez mayor, llegando a constituirse como el actor principal en la política boliviana, marcando el camino que llevara a la elección de Evo Morales a la presidencia.

2.3.1 Una crisis de legitimidad doble: el fracaso social del modelo neoliberal y la ‘cooptación’ del sistema de representación partidaria

El retorno a la democracia en América Latina ha sido caracterizado como una transición doble, en el sentido que junto a la reinstauración de la práctica democrática se dio paso a un nuevo modelo económico de corte neoliberal. Dicho modelo tuvo efectos significativos para la legitimidad institucional.

En un artículo sobre el neoliberalismo en América Latina, Kurt Weyland califica sus efectos en el sistema democrático como ‘mixtos’. Los efectos positivos estarían relacionados con la apertura de los países hacia la economía global en la que una mayor interacción con la comunidad internacional habría influido en la mantención de regímenes democráticos. Paradójicamente, los efectos negativos se dan justamente a raíz de la creciente influencia de actores externos, ya que la presión que estos ejercen sobre las políticas nacionales, termina por constreñir el espacio de acción de gobiernos que se ven cada vez más dependientes del capital extranjero. Tal proceso produce así la restricción de las opciones democráticas, el debilitamiento de los partidos políticos y, por ende, la participación política formal (Weyland, 2004: 135-157).

Estudiando el caso particular de Bolivia, John-Andrew McNeish (2006) hace un argumento similar. El neoliberalismo en Bolivia habría puesto mayor énfasis en las

reformas económicas, con el objeto de atraer capitales extranjeros, dejando de lado esfuerzos destinados a un desarrollo social con una participación política significativa por parte de la sociedad. En términos de legitimidad institucional, esto se tradujo en la percepción por parte de la ciudadanía de que, en aras de preservar la estabilidad (política y económica), se hacían primar los intereses de actores externos sobre las necesidades (básicas) de la sociedad. Asimismo, los actores externos prestaron un apoyo condicionado a las élites locales con el objetivo de mantener una hegemonía política y económica favorable, en el que no se contemplaba el desarrollo social. Este proceso deterioró paulatinamente en una falta de voluntad política de la élite económica por emprender acciones que presenten una mejora cualitativa de la democracia, lo cual terminaría por desvirtuar el sistema político en general.

Por otro lado, el funcionamiento del sistema partidario después de la transición no fue óptimo. En un estudio en América Latina, Mainwaring y Scully (1995) definen la institucionalización del sistema de partidos como una competencia interpartidaria estable, en donde los partidos políticos tienen raíces en la sociedad y en donde los partidos y las elecciones son aceptados como instituciones legítimas. En Bolivia, después de la transición se instaló un sistema multipartidista de relativa estabilidad, construido sobre el entendido común de la necesidad de sustentar la democracia representativa y la economía de mercado. Como explica René Antonio Mayorga (2004), cuatro factores incidieron en la formación de este sistema: la derrota de la izquierda tradicional, la aparición de posiciones más moderadas al interior de la sociedad, la implementación de políticas económicas de ajuste estructural, y la adaptación de gobiernos de coalición. Pero la estabilidad (política y económica) fue la única virtud de este sistema, ya que la preservación de la democracia no fue acompañada por un desarrollo social, ni por la creación de vínculos entre los partidos políticos y la sociedad. La transición hacia una economía de mercado fue acompañada por el crecimiento de la economía informal en detrimento de las bases sociales de los partidos políticos, al mismo tiempo que éstos no mostraban respuesta a las demandas y expectativas de sus electorados. A partir de 1979 se percibe así una fuerte ‘volatilidad electoral’ de las elecciones presidenciales (idem).

Lo cierto es que de forma gradual, las coaliciones gubernamentales se convirtieron más en un acuerdo entre los líderes máximos del partido, conformando una *estructura de tríada partidista*, en la que el mando de la coalición sería alternada entre el MNR, MIR y ADN, y en la cual nuevas agrupaciones políticas (como CONDEPA y UCS) sólo serían secundarias o funcionales: la denominada ‘democracia pactada’. Se generó así un estilo ‘hermético’ y prebendal de hacer política en la que los partidos políticos degeneraron en ‘máquinas electorales y agencias de distribución de cargos públicos y apropiación de recursos’ (idem), absorbidos en las estructuras estatales y carentes de nexos reales con la sociedad. Asimismo se desnaturalizó la práctica responsable de la oposición en el parlamento, de manera tal que la práctica institucional del Estado no sufría un control efectivo por los partidos políticos.

En resumen, el sistema partidario funcionó altamente deficiente. Incluso se podría argumentar que tal sistema en Bolivia es históricamente rudimentario, excluyente y elitista (Van Cott, 2000). Podemos entonces concluir que, con el objetivo de mantener un modelo económico neoliberal, el sistema de representación partidaria sufrió una suerte de co-optación por parte de las élites económicas, tornándose incapaz de representar las demandas e intereses de la sociedad hacia el Estado, y poniendo en tela de juicio su cualidad y calidad democrática de mediación entre el Estado y la Sociedad. Es así que a fines de siglo el sistema de representación política por medio del partido político atravesaría una aguda crisis de legitimidad.

La cooptación de los partidos políticos y el fracaso del modelo neoliberal de llevar el desarrollo y bienestar social esperados generaron un crisis de legitimidad doble. La creciente articulación de los movimientos sociales responde en cierta medida al funcionamiento deficiente de los partidos políticos y en resistencia a los efectos negativos del modelo de desarrollo implementado por el Estado. Las vicisitudes del sistema de representación y el modelo neoliberal, así como el poder de incidencia política que se construía en los movimientos sociales, se verían más claramente – y con más fuerza – en el periodo 2000-2005.

2.3.2 Construyendo el actor político ‘movimiento social’ en la insurgencia social: movimientos sociales urbanos y las ‘Guerras’ en defensa de los recursos naturales

El nuevo milenio marcaría el fin de la ‘democracia pactada’, con la emergencia de fuertes movimientos sociales urbanos e indígenas que gradualmente articularon un discurso reaccionario en contra del neoliberalismo y el sistema político vigente. El punto de inflexión se dio en las elecciones generales del 2002, y se consolidaría con la posterior crisis social y política que llevaría al revocamiento del mandato de dos presidentes y la ascensión de una nueva fuerza política al poder.

La articulación de las organizaciones indígenas campesinas en la forma de movimientos sociales hizo cada vez más notorio el carácter cooptado de los partidos políticos, en la medida en que la ofensiva de los nuevos movimientos sociales indígenas y otros no tuviera ninguna incidencia sobre los gobiernos de coalición. Los partidos políticos perdieron importancia como contrapartes de negociación, no sólo contribuyendo a su desgastamiento y deslegitimación, sino también abriendo el espacio para que la interpelación de los movimientos sociales se dirija de manera directa y más intransigente a la estructura estatal.

A estos factores estructurales se sumó uno coyuntural en la forma del estancamiento económico que se empezó a sentir a partir de 1999. Para un país que continuaba sujeto a modelo económico sustentado en la exportación de materias primas, la recesión económica internacional en este periodo tuvo una incidencia mayor. A causa de las restricciones económicas el poder estatal se vio seriamente cuestionado en su

capacidad de acción y respuesta a problemas de desempleo, pobreza y corrupción, creando un escenario propicio para la multiplicación de los conflictos. Así, el gobierno de Bánzer (1997-2001) se vio rápidamente envuelto en una dinámica perniciosa de ceder a toda clase de demandas y chantajes haciendo uso patrimonialista de los recursos del Estado, abriendo el camino para el intenso ciclo de movilizaciones del periodo 2000-2005.

A partir del año 2000, en el contexto de la creciente crisis económica y política, las luchas anti-sistema del movimiento cocalero fueron acompañadas por una serie de protestas y movilizaciones sociales en todo el país. La ola de movilizaciones tendría sus máximas expresiones en las denominadas 'Guerra del Agua' en el año 2000 y 'Guerra del Gas' en el año 2003. La lectura general de este periodo, como explica también Sven Harten, es que se trata de un proceso de convergencia de distintas movilizaciones locales y particularistas para la articulación de acciones colectivas a nivel nacional, con el objeto de lograr reformas políticas a ese nivel (2011: 118). En este sentido, tales movilizaciones presentan una continuación y reforzamiento de la tendencia marcada por el movimiento cocalero de formular una reivindicación particular en un discurso de interés nacional.

A mi juicio, este periodo se caracteriza efectivamente por el proceso descrito. Sin embargo, hacemos una lectura paralela. El paso hacia la aglutinación de demandas locales y particulares fue acompañado por la intensificación de un proceso tal vez aún más importante, a saber: la evolución del 'movimiento social' en el 'sujeto político' principal de la lucha por un nuevo proyecto popular nacional. Dicho proceso continuaría, como veremos más adelante, en el primer término gubernamental de Morales, y se podría defender también que sigue su curso durante la segunda gestión del MAS—ya sea en mayor o menor medida—. Lo cierto es que, a partir del año 2000, a través de sus luchas y conquistas, el movimiento social hace un salto considerable hasta legitimarse como actor político en el contexto boliviano, dejando su papel (marginal) en la sociedad para posesionarse al centro del ámbito político.

La Guerra del Agua se desató en la ciudad de Cochabamba. Tuvo como antecedente el hecho que, en un marco de políticas neoliberales, el gobierno de Hugo Bánzer Suárez entregara a finales de 1999 en concesión los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad a la empresa Aguas del Tunari—un consorcio transnacional con base en Estados Unidos, en manos de Bechtel. A pesar de acuerdos previos, las facturas que llegaron a los ciudadanos a principios del año 2000 mostraron un incremento de hasta 200 por ciento, haciendo impagable el servicio para una gran parte de la población. Inmediatamente, una serie de movilizaciones espontáneas fueron acompañadas por el Comité por la Defensa del Agua (21) y por la importante Federación de

(21) Esta organización se había creado durante las negociaciones del contrato con Aguas del Tunari.

Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) (22). Esta última se había convertido en vehículo principal de protesta en torno a la recurrente cuestión de escasez de agua de la región.

Las movilizaciones se expandieron rápidamente con la participación de otras organizaciones sociales –incluyendo a los sindicatos– que articularon la protesta en torno a la nueva Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida (23), reuniendo a actores urbanos y rurales y logrando la radicalización del movimiento. Hacia fines de marzo un par de miles de participantes resistían la represión ejercida por el Estado, cuya confrontación resultó en un muerto y docenas de heridos.

La magnitud de la protesta fue tal que impidió que el gobierno pudiera contenerla, viéndose éste obligado a cancelar el contrato con Aguas del Tunari el 9 de abril. La administración de Aguas del Tunari volvió a manos del Estado, pero más importante aún, se hizo la promesa de que los movimientos sociales tendrían un papel más grande de control. Dado que para ello era necesaria una enmienda legislativa, las jornadas de Cochabamba adoptaron una importancia a nivel nacional (Assies, 2003). Asimismo, la Guerra del Agua dejó en claro que la protesta social podía ser un medio efectivo para la reversión de políticas gubernamentales que se movieran en contra de los intereses de vastos sectores de la población.

En un escenario de crisis económica y crisis de legitimidad del modelo político-económico, la Guerra del Agua tuvo el efecto de alentar a la ciudadanía a expresar su descontento y rechazo a través de la protesta social. Es así que los años siguientes vieron la proliferación de conflictos movilizadores – como el bloqueo de caminos organizado por la CSUTCB en Oruro en julio del 2001 – además del recurrente activismo de los cocaleros,

(22) La Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) se forma en 1997. La estructura de regulación y gestión de los sistemas de agua y riego en los valles de Cochabamba se remonta a la época colonial e incluso pre-colonial, en forma de asociaciones de riego. Si bien éstas no tuvieron un protagonismo político visible (éste estuvo siempre conformado por los sindicatos agrarios, de los cuales se entendía que las asociaciones de riego eran sólo un componente), estuvieron siempre presentes y empezaron a cobrar mayor visibilidad política partir de los años '90. Desde ese entonces, el Estado emprendería políticas dirigidas al control, expropiación y regulación del agua controlada por los comunarios, activando estas organizaciones locales como se vio en la llamada 'Guerra de los pozos' entre 1994 y 1998. De esta manera se produce la articulación autónoma de las organizaciones, dando lugar a la formación de la FEDECOR. La organización presenta una asociación de asociaciones, cuyos miembros mantienen un amplio margen de autonomía, coordinando sólo ciertas tareas. Ver también García Linera *et al.* (2010: 646-666).

(23) El discurso formulado por la Coordinadora se construía sobre bases retóricas de corte nacional popular, anti-imperialista y anti-global, protestando en contra del modelo desarrollista. La Coordinadora se constituía así en un desafío importante para un sistema que fracasaba en defender los intereses populares, al mismo tiempo que se negaba a convertirse en una organización formal con reconocimiento oficial y prefería permanecer como una red informal que conectaba a distintos actores sociales (Perreault, 2006; Assies, 2003).

En enero del 2002, en la localidad de Sacaba, protestas conducidas por Evo Morales en contra de la prohibición gubernamental de vender coca en el mercado local resultaron en la muerte de tres campesinos y dos militares. Esta confrontación tuvo importancia en dos sentidos. Por un lado, nuevamente el movimiento social fue exitoso en su objetivo, logrando que el gobierno desistiera de la implementación de mayores restricciones para la comercialización de la hoja. Por otro, a raíz del conflicto, el Congreso resolvió expulsar a Evo Morales –el diputado más votado del Congreso Nacional– acusándolo de una presunta instigación al desorden social y bajo un procedimiento un tanto dudoso (24) La expulsión de Morales fue interpretada por muchos sectores de la población como una humillación que mostraba nuevamente la ‘pseudo-democracia’ de la clase política, en particular porque Morales acrecentaba su liderazgo tanto de las fuerzas de oposición al establishment, como del movimiento cocalero e indígena. En respuesta, en mayo del 2002 partió la Cuarta Marcha Indígena desde la ciudad de Santa Cruz, siendo su primera demanda el establecimiento de la Asamblea Constituyente (25) con mucho más fuerza que la primera vez que se planteó en la primera marcha indígena de 1990.

Estos acontecimientos fueron de gran influencia para las elecciones nacionales, realizadas solo un mes más tarde, el 30 de junio del 2002. Contra toda expectativa, los resultados ubicaron al Movimiento al Socialismo de Morales como la segunda fuerza política del país, dando cuenta de la creciente insatisfacción con el sistema político y el modelo de desarrollo vigentes. Sin embargo los partidos tradicionales hicieron oídos sordos a este claro mensaje desde la sociedad, y prosiguieron con la formación de una coalición como lo habían hecho en años anteriores. Es así que Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, asumió por segunda vez el mando del país. En unos de sus primeros actos el flamante presidente produjo el siguiente episodio de protagonismo e incidencia de los movimientos sociales.

Ante la crisis económica, el gobierno del MNR pretendió aumentar los ingresos estatales a través de un incremento del impuesto directo al salario, con un 12,5 por ciento. Esta medida afectaba severamente al limitado contingente de asalariados formales, sobre todo maestros, médicos, enfermeras, policías y fabriles (26). Las mo-

(24) Morales fue encontrado culpable de ‘abuso de la inmunidad parlamentaria’ a pesar de las quejas de 14 legisladores indígenas e izquierdistas en el parlamento.

(25) Esta es la primera vez que la demanda por una Asamblea Constituyente se hace tan explícita, y como veremos más adelante puede identificarse como el principio del proceso constituyente boliviano del periodo 2006-2009.

(26) En un estudio revelador sobre la relación entre el gobierno y el FMI, Jim Schultz (2005) muestra el impacto que tuvo esta entidad en detonar el conflicto. La comunicación entre ambas instancias muestra la presión que habría ejercido el FMI por reducir el déficit fiscal en el periodo de un año, hasta que quedara por debajo de 5.5 por ciento. Esto se ponía como condición para mantener el acceso a préstamos a largo plazo. La presión dividió al gobierno entre un bando que proponía lograr la reducción del déficit a través de un incremento del impuesto a las transnacionales que explotaban el gas, y el otro que prefería lograr ese objetivo por medio de un impuesto directo al salario. Finalmente se optó por esta última.

vilizaciones en contra del *impuestazo* explotaron casi inmediatamente entre enero y febrero del 2003, teniendo a un motín policial como el núcleo de las protestas. El conflicto escaló al punto en que las masas atacaron edificios gubernamentales y centros comerciales, con un saldo final de 33 muertos. El gobierno nuevamente tuvo que ceder a las demandas de la población movilizada y retroceder en sus planes.

La protesta social llegaría a su apogeo en los eventos conocidos como la Guerra del Gas, en octubre de ese mismo año. El *impuestazo* había tenido el importante efecto de poner en el centro de la atención pública los bajos ingresos que el Estado percibía de sus contratos con las empresas transnacionales (Gutiérrez Aguilar, 2008: 227), a causa de la privatización de la empresa petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la ola de capitalización implementada por el primer gobierno de Sánchez de Lozada. El 2003 vivía una ola de protestas prácticamente continúa en la que los movimientos sociales mantenían acciones locales en torno a demandas específicas por todo el país – sobre todo el área rural –. Cuando el gobierno empezó a hacer pública su intención de vender las reservas nacionales de gas y realizar la exportación a través de Chile, como líder de la oposición, Evo Morales inmediatamente convocó a los movimientos sociales a unirse a las protestas en contra de las condiciones previstas para la exportación del recurso natural (27).

Con el antecedente de la Coordinadora del Agua, a mediados de septiembre de 2003 se creó la Coordinadora Nacional por la Defensa del Gas para coordinar y reforzar las protestas y bloqueos. La consigna ‘ni una molécula de gas a Chile’ galvanizó también a la opinión pública, sensible a toda acción antichilena a consecuencia de la pérdida de una guerra en el siglo XIX que le privó a Bolivia de una salida soberana al Océano Pacífico. El conflicto empezó a empeorar cuando el Ministro de Gobierno, Sánchez Berzaín, impulsó una operación militar para el rescate de un grupo de turistas que habían quedado atrapados por un bloqueo en la localidad de Sorata. La presencia militar provocó enfrentamientos en la población de Warisata, resultando en siete muertos y diecisiete heridos (28). Esta acción fue bautizada como la ‘Masacre de Warisata’ de campesinos aymaras, y el incidente sirvió para dar un nuevo impulso a la ola de protestas, provocando la expansión de los bloqueos de caminos.

(27) Las condiciones estipulaban lo siguiente: los operadores tendrían que pagar una regalía de 18 por ciento por las nuevas reservas que fueran descubiertas, a lo que se sumaba un 12 por ciento de impuesto por el valor del gas *en boca de pozo* (es decir sin ningún valor adicional de procesamiento), basado sobre un precio de solo \$0.50 centavos por 1000 BTU (British Thermal Units). A este precio, ya muy por debajo del precio del mercado, se le podían descontar además todos los costos de transporte y distribución (Harten, 2011: 120).

(28) *El Diario, Warisata: siete muertos y 17 heridos es el saldo*, 22 de septiembre 2003. Consultado a través de http://www.eldiario.net/noticias/2003/2003_09/nt030922/4_02scd.html, última consulta noviembre 2012. Según el informe de la BBC se trataría de cinco muertos: un soldado y cuatro civiles. BBC Mundo, La crisis paso a paso, 18 de octubre de 2003. Consultado a través de http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3202000/3202586.stm, última consulta noviembre 2012.

Asimismo, en la localidad de El Alto –satelital a la ciudad de La Paz– se había formado un núcleo de protestas en contra de distintos planes gubernamentales. Las características de esta ciudad, cuya población se conforma principalmente por migrantes rurales de origen aymara, fueron determinantes en la Guerra del Gas (29), destacando el desempeño de la Federación de Juntas Vecinales El Alto FEJUVE-El Alto. Como explica Raquel Gutiérrez ‘... Estas agrupaciones son, en cierta medida, una especie de recreación urbana de la autoridad tradicional y/o sindical de las comunidades rurales y, sobre todo en los barrios con mayor presencia aymara, funcionan de manera similar a los sindicatos campesinos de base’ (Gutiérrez Aguilar, 2008: 246-247), con un fuerte componente de presión social. Estas organizaciones aprovecharon sus estructuras y prácticas para la deliberación y movilización durante las acciones colectivas de septiembre y octubre del 2003.

Ya en los primeros días de septiembre las demostraciones habían terminado en enfrentamientos con la policía. En estas jornadas se hacía también referencia a temas de alcance nacional como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y más significativa aún, la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta última, promulgada en agosto del 2003, en sus artículos 213 y 214, calificaba como delito con pena de cárcel el bloqueo de calles y caminos. Siendo este el instrumento tradicional de la lucha social del país, las protestas se intensificaron –recibiendo también el apoyo de la Central Obrera Regional de El Alto (afiliada a la COB)– y contribuyendo así a la deslegitimación del gobierno y los partidos políticos.

La fuerte represión estatal repercutió en un paro cívico que dejó cercada la ciudad de La Paz. A partir de entonces, las protestas se esparcieron desde El Alto hacia otras regiones del país, ganando también la simpatía de trabajadores urbanos que, desde la COB, llamaron a un paro general pidiendo la renuncia del presidente. La decisión del gobierno de optar por la represión hizo que más actores se sumaran a la protesta, momento en el cual la consigna del Gas se volvió la demanda común en torno a la cual se articularon, de manera compleja, las reivindicaciones locales y sectoriales. Todas ellas, prontamente, fueron sintetizadas en el lema ‘Gas, constituyente y renuncia!’.

El punto más agudo de la crisis se dio el 12 de octubre. Después de que el gobierno promulgara el ‘decreto de la muerte’, bajo el argumento de abastecer a la ciudad de La Paz de combustible, un convoy de cisternas salió de un depósito de Sen-

(29) La población de la localidad creció considerablemente después de la Revolución del ’52 cuando fueron asentadas ahí una diversidad de industrias. Una segunda ola de crecimiento poblacional se dio a partir de 1985 a causa de la ‘relocalización’ de familias de mineros después que las reformas neoliberales cerraran los centros mineros. En 1985 se aprobó que El Alto se constituyera como municipio, dejando de ser parte de la ciudad de La Paz. Los barrios se formaron rápidamente replicando casi completamente las comunidades rurales, dotándoles de una homogeneidad notable, además de que los residentes mantuvieron y mantienen lazos estrechos con sus lugares de origen. Estas características formaron la base para una forma de organización de la cual evolucionarían las Juntas Vecinales.

kata, ubicada en la ciudad de El Alto, custodiado por fuerzas militares y policiales (30). Los residentes alteños enfrentaron la acción militar durante dos días, produciendo una batalla que dejaría un saldo de más de 250 heridos y más de 60 muertos. Así, la Guerra del Gas arrojaría un total luctuoso de 80 muertos y más de 400 heridos (Perreault, 2006).

Lo implacable de los sucesos impactó a la clase media urbana, sobre todo por el grado de violencia utilizado contra la población, pero también porque ponía en evidencia la gravedad de la crisis en la cual el escenario de una guerra civil se hacía cada vez más real. En la ciudad de La Paz segmentos de esta clase empezaron a organizarse en debates y concentraciones, al mismo tiempo que el gabinete gubernamental se iba desmoronando recibiendo una a una las renunciaciones de sus ministros. Las movilizaciones y bloqueos acrecentaron, volviéndose cada vez más masivos. Éste sería el escenario que, finalmente, obligaría al presidente Gonzalo Sánchez de Losada a renunciar, abandonando clandestinamente el país el 17 de octubre.

La Guerra del Agua fue primero un sorprendente incidente –en el que la ciudadanía organizada en la forma de movimiento social fue capaz de doblegar al Estado y hacer retroceder los planes gubernamentales– para después volverse el antecedente de una serie de episodios en el que la movilización se imponería al plan gubernamental. Hacia fines del 2003, el movimiento social parece haberse legitimado – al menos desde la percepción ciudadana – en un medio más, altamente efectivo, de participación política, en la medida en la que a través de él se hacían valer los intereses de la ciudadanía hacia el Estado. En un escenario de convulsión social y crisis institucional, el movimiento social emerge como el actor político más importante, ejerciendo de facto un papel de mediación entre la Sociedad y el Estado.

Haciendo un balance podemos concluir que el precio de la estabilidad política y económica por más de quince años fue alto. El modelo económico neoliberal fracasó en llevar desarrollo social abriendo aún más la brecha entre ricos y pobres. En muchos casos las políticas neoliberales afectaron perniciosamente a vastos sectores de la población (por ejemplo con la deslocalización de los mineros, el crecimiento de la economía informal, la criminalización del modo de subsistencia de los campesinos coccaleros, la privatización de los servicios básicos de la población, etcétera). Este explica que el discurso anti-neoliberal haya tomado tanta fuerza en las movilizaciones sociales, tornándose cada vez más explícito como se ve en las ‘guerras’ por los recursos naturales.

(30) Tal decreto declaraba al territorio de la República en ‘emergencia nacional’, y ordenaba a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del transporte de combustible en cisternas. Asimismo, estipulaba que ‘Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudieren producir..., su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano’, lo que se entiende como un permiso para matar. Decreto Supremo 27209 del 11 de Octubre de 2003, consultado a través del sitio web de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/2530> (última consulta 15 de noviembre de 2012).

Por otro lado, el sistema de representación partidaria sufrió una suerte de cooptación por parte de las élites económicas, degenerando significativamente su papel de mediación entre el Estado y la Sociedad. En la medida en que los efectos de la política neoliberal se hacían sentir, mientras que los partidos políticos no eran capaces de transmitir las demandas de la población, ni mucho menos convertirlas en políticas públicas, los partidos políticos fueron percibidos por la población cada vez más como instrumentos al servicio del capital. En una relación Estado-Sociedad con toda la apariencia de un funcionamiento democrático – en la forma de un sistema multipartidario competitivo estable – los movimientos sociales pusieron en evidencia las vicisitudes de la estructura política. En este sentido, la crisis económica se muestra sólo coyuntural a problemas de raíz. La crisis de legitimidad de los partidos políticos y la de la gestión gubernamental progresó en la deslegitimación total de la institución estatal.

Ahora bien, la convergencia entre el protagonismo político que adquiere el movimiento social y la crisis de legitimidad del sistema político plantean la pregunta si existe una relación causal entre ellos. Al respecto, George Gray Molina explica que no es acertado adjudicar la emergencia de fuertes movimientos sociales a la crisis de legitimidad de los partidos políticos y de la institución estatal. De la misma forma, tampoco sería válida la afirmación que la emergencia de nuevos actores sociales – los nuevos movimientos sociales – haya sido la causa principal de la crisis de legitimidad del sistema político en Bolivia. Gray Molina deja la verdad un poco en el medio, aunque sin precisarla, argumentado que también es necesario tomar en cuenta el factor económico, tanto como causa y desafío, para entender la relación entre la insurgencia social y la crisis institucional (Gray Molina, 2004: 45-46).

Buscando precisar, nosotros diríamos que la configuración político-social en la que el movimiento social se vuelve el actor más importante de la política y asume un papel de mediación de los intereses de la sociedad hacia el Estado, se da a raíz de la interacción ‘dialéctica’ Estado-Sociedad. Esta a su vez, responde y es marcada por un contexto socio-político particular, en un proceso de formación y reformación mutuo. De tal manera, se puede hablar de una relación causal pero en dos direcciones y de manera continua, sin resolver ‘la paradoja del huevo o la gallina’.

Más importante aún, el creciente protagonismo de los movimientos sociales en Bolivia y la relación de éste desarrollo con el sistema de partidos políticos, remite al debate presentando en el capítulo 1 en torno a la distinción entre ‘política institucionalizada’ vs. ‘política no-institucionalizada’. La escenario boliviano parece sustentar la idea que los movimientos sociales no son esencialmente distintos a los partidos políticos, sino que constituyen un canal más de relacionamiento Estado-sociedad al lado de la forma más institucional del ‘partido político’. Desde esta concepción se explica con mayor facilidad que, al verse un tipo de canal debilitado (la pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos a causa de su cooptación), otros canales (los movimientos sociales) adquieran una actividad más intensa. En este sentido, en particular en el periodo 2000-2005, vemos como en Bolivia se tornan borrosos los márgenes

entre la política ‘institucional’ y la ‘no-institucional’, lo cual se inscribe en el cuestionamiento de la dicotomía Estado-sociedad de la que deriva dicha distinción.

2.4 La toma del poder político: la llegada de Evo Morales a la presidencia

Hasta lo descrito aquí, la actividad de los movimientos sociales en Bolivia podía explicarse a partir de la visión dominante que los caracteriza por su oposición a la estructura estatal. Desde el retorno de la democracia, la paulatina articulación de los nuevos movimientos sociales en Bolivia se dio como resultado de la resistencia a políticas estatales y la presión de demandas hacia el Estado. El carácter ‘anti-Estado’ se expresa con particular claridad en el periodo 2000-2005 en el que la lucha de los movimientos sociales se vincula a la crisis de legitimidad que sufre esta institución. Cómo se verá, dicha crisis deriva en un escenario de ingobernabilidad con el derrocamiento de dos presidentes constitucionales, lo cual en su momento puso serias dudas sobre el grado de consolidación democrática en el país. Resulta entonces un tanto sorprendente, el hecho de que dicha crisis haya tenido una solución y conclusión democrática con la elección de Evo Morales como presidente constitucional.

¿Cómo se explica que los movimientos sociales hubieran optado por la vía formal de la competencia partidaria y las elecciones, en un momento en que la arena política se prestaba a pensar en escenarios más radicales? Sin embargo, bajo el entendido que los movimientos sociales y los partidos políticos son en realidad parte de un mismo sistema, dicho desarrollo resulta menos incoherente.

2.4.1 La elección de los movimientos sociales por el sistema político formal

La Guerra del Gas logró una activación y movilización amplia de la sociedad boliviana, en la que destacaría la actividad urbana. La fuga del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dejaba en relieve la magnitud de la crisis, agravada por la amenaza real de caos o desorden social. Asimismo, la fuerza de los actores sociales evidenciada en el éxito de bloquear la política gubernamental y expulsar a la máxima autoridad del Estado, dictaminaría el curso de la política.

La insurgencia desde la sociedad era sobre todo indicativa del rechazo al sistema político vigente; sin embargo, la victoria social no optó por una salida totalmente opuesta a ése sistema. Muy al contrario, la sucesión constitucional del Vicepresidente, aceptada prácticamente sin reclamo alguno, era justamente lo que prescribía la formalidad institucional. ¿Cómo se explica esta contradicción? A nuestro parecer, la elección del sistema político formal está relacionada a tres factores: la figura del vicepresidente, la estrategia política de Evo Morales y el MAS, y la inexistencia de una visión política única por parte de la fuerza social que había derrocado al gobierno.

Carlos Mesa Gisbert, el vicepresidente del gobierno del MNR, no representaba una figura que pudiera ser asociada inmediatamente con el ‘establishment’. En

realidad, la vicepresidencia de Mesa simbolizaba la primera incursión política de una figura pública altamente respetada. Antes de formar el binomio con Gonzalo Sánchez de Lozada, Mesa había sido periodista e historiador, consolidando su estatus como figura pública en un programa televisivo de opinión de alto nivel (‘De Cerca’). Desde ese pasado, a pesar de la fuerza de la revuelta social, Mesa podía asumir la presidencia como una persona de relativa neutralidad y, por ende, con relativa aceptación por parte de la sociedad. De hecho, en su discurso de posesión, destacó su rol transitorio para promover la decisión ciudadana en futuras elecciones; promesa que luego olvidaría rápidamente.

Un segundo factor que explica la opción por la política formal debe ser buscado en el cálculo estratégico de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo. Recordemos que el MAS se constituía en la segunda fuerza política en las elecciones del 2002, sólo a unos puntos detrás del MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada, convirtiéndole en un candidato con posibilidades ciertas. Como explica Gutiérrez, fueron ésas las intenciones que primaron en la decisión del Movimiento al Socialismo de preservar el ‘proceso democrático’ (Gutiérrez Aguilar, 2008: 265), expresadas en el apoyo inicial por parte de Morales a la presidencia de Mesa. Por su lado, las mismas clases dominantes comprendían el riesgo de derivar en una situación de confrontación social en detrimento de sus propios intereses, por lo que tampoco se opusieron a la sucesión de Mesa.

Pero tal vez el factor más importante para que después de los sucesos de la Guerra del Gas no se optara por una transformación política al margen del sistema político formal y con un papel central para quienes habían protagonizado la victoria social de octubre del 2003, es decir los movimientos sociales, era el hecho de que en ese momento no se contaba con una única visión de país o un único proyecto político propia desde los movimientos sociales, para que así pudieran dar curso y forma a una transformación. Los principales actores de la Guerra del Gas –la CSUTCB, la Coordinadora y los coccaleros –presentaban diferencias de fondo sobre cómo se debía proseguir con los recursos del Gas y con la consigna de la Asamblea Constituyente, de tal manera que la llamada ‘agenda de octubre’ –si bien contundente y explícita– no presentaba en sí un proyecto de reformulación política de magnitud nacional.

Así, en octubre del 2003 se respetaron las reglas del sistema político vigente, pero al mismo tiempo se consolidó un cambio importante, a saber: el cambio del lugar de la decisión política. Mesa no asumía la presidencia tanto por el proceso electoral que le había llevado a su posición, sino más bien porque la fuerza social expresada en los movimientos sociales se lo permitían; es decir, por decisión –o al menos condescendencia de los movimientos sociales. Esto se expresa también en el hecho de que Mesa asumiera la presidencia con una limitada agenda que pudiera contar con el respaldo de los movimientos sociales: la reversión de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada en 1996, el incremento de las regalías del 18 al 50 por ciento, y las convocatorias a un referéndum para definir el destino de los hidrocarburos y a una Asamblea Constituyente.

2.4.2 Empoderamiento político de los movimientos sociales indígenas: el nacimiento del Pacto de Unidad

La marcha indígena del año 2002 había logrado posicionar el tema de la Asamblea Constituyente en los espacios de deliberación de las organizaciones indígenas, y esta consigna formaría la base para una articulación de estas organizaciones en el denominado Pacto de Unidad.

El ambiente político radicalizado, junto a la crisis de legitimidad que sufría el sistema político centralizado, tendría también como efecto el resurgimiento de un regionalismo politizado, representando principalmente a las élites económicas del país. A mediados del 2004, el Comité Cívico de Santa Cruz realizó un ‘Primer Cabildo de la Cruceñidad’ que tenía como objetivo neutralizar la ‘agenda de octubre’ que el presidente Mesa se había propuesto llevar a cabo: referéndum sobre los hidrocarburos y Asamblea Constituyente. En respuesta, entre el 8 y 10 de septiembre de ese año, las distintas organizaciones de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas, se reunieron significativamente en Santa Cruz, en un ‘Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias’(31). En este evento se conformó el Pacto de Unidad, concretizando la intención del movimiento indígena de formar una plataforma única frente a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, al mismo tiempo de garantizar su proceso. Dicho Pacto empezó a funcionar, con todas sus dificultades, a partir del 2004 y paulatinamente remplazaría al movimiento cocalero en el liderazgo de la lucha social.

El antecedente de esta articulación se encuentra, sin duda, en las marchas indígenas de los años noventa y de principios del siglo 21, no sólo importantes en la medida en que presentaban demandas indígenas al Estado, sino también porque sirvieron como un punto de encuentro y reconocimiento de la diversidad de pueblos indígenas presentes en el país. Cabe destacar que la CIDOB no formó parte del Pacto en sus inicios. Sin embargo, gradualmente, el Pacto se estabilizaría y sería reconocido como la colaboración de las cinco organizaciones indígenas matrices, a nivel nacional, que juntas aglutinaban prácticamente a la totalidad de organizaciones indígenas campesinas del país. Estas son:

- CSUTCB
- Bartolinas
- Colonizadores
- CONAMAQ
- CIDOB

(31) En el evento participaron las siguientes organizaciones: la Asamblea del Pueblo Guaraní APG, la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, el Movimiento Sin Tierra MST, la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable, el Movimiento Cultural Afrodescendiente, la CSUTCB, las Bartolinas, CONAMAQ, la CPEMB, el BO-CINAB, la CTDAC y la CSCB.

Esta formación resulta reveladora, no sólo por su conformación, sino también por el momento en el que emerge. Muestra que, desde un principio, el MAS no era tan solo (o era más) la suma de los movimientos sociales indígenas. De la misma manera, se podría decir que los pueblos indígenas, representados en el Pacto de Unidad, desplegaban una autonomía relativa, al margen de los vínculos orgánicos que le unían al MAS, y que no había una estrategia conjunta de resistencia a fuerzas opositoras provenientes de otros sectores de la sociedad. Alejandro Almaraz, quién estuvo involucrado en la fundación del MAS y le acompañó hasta el primer gobierno de Morales, sostiene:

‘No se pensó que el instrumento tendría que constituir una estructura distinta de las organizaciones. Eran las mismas organizaciones las que en su momento tomaban decisiones y actuaban en función de la política de las elecciones, y en ese momento se llamaban ‘instrumento’.’ (32)

Sin embargo, el Pacto de Unidad parece emerger al margen del instrumento:

‘El espacio del programa NINA es un espacio donde las organizaciones se encuentran, han ido viniendo los dirigentes con sus problemas y donde han encontrado una identidad en base a la similitud de sus programas con los de otras organizaciones y han ido articulando para hacer fuerza común. Así se ha ido construyendo el Pacto de Unidad. El Pacto no es una declaración, es una construcción desde abajo, de manera larga, difícil.’ (33)

‘El Pacto de Unidad es una instancia orgánica de los movimientos sociales, ... El Pacto de Unidad es la ente de matrices nacionales que se desprende gracias a los grupos sociales a nivel departamental que son orgánicos.’ (34)

‘Una cosa es el gobierno y otra cosa, muy diferente, es el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad existe más allá del MAS, y de Evo Morales.’ (35)

A nuestro parecer, esto permite sostener que la insurgencia social rebalsaba el liderazgo de Morales y del Movimiento al Socialismo. Como mostramos anteriormente, la cuestión del Gas sirvió de contenedor para una serie de demandas de sectores sociales, cuyo activismo no terminaría con la reversión del plan gubernamental, y que por su diversidad, complejidad y conflictividad entre sí, desbordaban los alcances de

(32) Entrevista a Alejandro Almaraz, exViceministro de Tierras. Cochabamba, 12 noviembre de 2010.

(33) Entrevista a Walter Limache, Director Nacional del Programa NINA. Cochabamba, 10 noviembre de 2010.

(34) Entrevista a Lázaro Taco, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano CIDOB. Santa Cruz, 4 de noviembre de 2010.

(35) Entrevista a Karina Mariaca, asesora del Pacto de Unidad. La Paz, 30 de septiembre de 2010.

Morales y del Movimiento al Socialismo. Es indicativo que en la Guerra del Gas el protagonismo no residió en el instrumento, sino más bien principalmente en la FEJUVE de El Alto, la CSUTCB y por supuesto la Coordinadora del Gas, y después en los movimientos sociales que emergieron por todo el país en las jornadas de octubre. Después de la Guerra del Gas, esa energía social se canalizaría a otros espacios además de los creados por el MAS. Ése es el contexto en el que puede entenderse la articulación del Pacto de Unidad.

Al mismo tiempo, es indicativo que, a pesar de la ascendencia del movimiento cocalero al interior de la CSUTCB, la instancia representativa del movimiento cocalero, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba COCA TRÓPICO, no ingresara al Pacto de Unidad. Tampoco formaron parte de ella la FEJUVE ni la Coordinadora del Gas o, por ejemplo, la COB. Esto deja en relieve un dinamismo y pluralidad de demandas al interior de la sociedad que (todavía) no se unificaban detrás de una agenda común y, por lo tanto, no podían ser captadas por una única instancia, sea éste el Instrumento o el Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad puede entenderse como un esfuerzo de hablar con ‘voz propia’ por parte de los pueblos indígenas, bajo el entendido de que si bien se comparían muchas demandas con otros sectores de la sociedad en la lucha popular, al mismo tiempo perduraban intereses ‘indígenas’ que buscaban ser defendidos en acciones conjuntas desde sus organizaciones, siendo la demanda más importante la de la Asamblea Constituyente. Al respecto:

‘El Pacto de Unidad son las 5 organizaciones sociales, con el objetivo de la Asamblea Constituyente. Las 5 organizaciones formaron el pacto y en ese entonces existía una buena relación entre las organizaciones como también en la relación del Pacto con el gobierno.’ (36)

‘Inicialmente el Pacto de Unidad respondía a una demanda, que es la Agenda de Octubre, que se debía convocar a una Asamblea Constituyente. Ese era uno de los primeros objetivos. Ante los conflictos que se avizoraban en la Asamblea, del torpedeo de los opositores a este proceso, se plantea el Pacto de Unidad de todas las organizaciones sociales, en función de llevar adelante la Asamblea Constituyente.’ (37)

‘Fruto del Bloque Oriente nace el Pacto de Unidad, en el que están todas las organizaciones nacionales, las confederaciones con sus regionales. Para asegurar que sea a favor de todos los

(36) Entrevista a Felix Becerra, Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ. La Paz, 19 de abril de 2012.

(37) Entrevista a Porfirio Kochi, dirigente del CONAMAQ durante el periodo de la Asamblea Constituyente. La Paz, 18 de noviembre de 2010.

sectores sociales la Constitución Política del Estado. Nosotros como organización, todos juntos.’ (38)

Otra demanda importante después de la Guerra del Gas fue por supuesto la nacionalización de los hidrocarburos, que si bien no era una demanda inmediatamente indígena, si podía inscribirse dentro de la demanda por la Asamblea Constituyente en tanto ésta representaba ‘la búsqueda de lograr un espacio de reorganización de la distribución del poder colonial del país y de control sobre los apetecidos recursos naturales’ (Garcés, 2007: 232). Eulogio Núñez explica:

‘Pero los datos mostraban que era otra la realidad. Ahí viene todo lo que pasó en octubre del 2003, toda esa crisis. Luego se da lo que se llamó ‘la agenda de Octubre’, donde justamente estaba Asamblea Constituyente, nacionalización, cambio de políticas. Ahí viene la Asamblea Constituyente.’ (39)

Es así que, a través de esta demanda, crece el apelativo del Pacto, lo cual le permitiría finalmente asumir la representatividad de los movimientos sociales (40) en el periodo siguiente, en particular durante el proceso constituyente.

Aquí surge la pregunta de por qué las organizaciones indígenas recurren a una coalición indígena con fines políticos, si contaban ya con su ‘instrumento político’, el MAS. Como dijimos anteriormente, a nuestro parecer la energía social rebalsaba las posibilidades del MAS de contener y canalizar las demandas en el ámbito político. La inestabilidad política y social característica de todo el periodo 2000-2005 contribuía a la espontaneidad que iba marcando el proceso.

De igual importancia podría ser el hecho que, al menos en el tiempo de la Guerra del Gas y los meses después de ella, el MAS se movía sobre todo dentro del ámbito político formal; por decirlo de una manera, más como partido que como movimiento. La presidencia de Mesa fue en parte aceptada por el cálculo político del MAS, que empezaba a vislumbrar la posibilidad de llegar al poder a través del proceso electoral, y el MAS hizo hábil uso de su posición de poder logrando hacer política tanto dentro de las estructuras estatales defendiendo el sistema político, como fuera de ellas, en las calles junto a los movimientos sociales – manteniendo su perfil de oposición del ‘establishment’. Pero quizás justamente ello le hacía incapaz de representar el total de la lucha popular, dejando espacios que pudieran ser ocupados por las mismas organizaciones sociales de manera más autónoma. Es por ejemplo indicativo que, durante la Guerra del Gas, la estrategia perseguida por el MAS era la anulación de la Ley 1689 y su sustitución por una ley de diseño propio, centrada en el aumento de los im-

(38) Entrevista a Diego Faldín, presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC. Santa Cruz, 5 de noviembre de 2010.

(39) Entrevista a Eulogio Núñez, investigador del CIPCA. Santa Cruz, 5 de noviembre de 2010.

(40) Entrevista a Fernando Garcés, catedrático de la Universidad Mayor de San Simón. Cochabamba, 11 de noviembre de 2010.

puesto a las corporaciones (una solución política), mientras que desde la sociedad la demanda popular era cada vez más claramente la de la ‘nacionalización’ de los hidrocarburos.

2.4.3 La fuerza de los movimientos sociales: la llegada de Evo Morales al poder

El periodo 2004-2005 estaría marcado por el tema de los hidrocarburos y de la Asamblea Constituyente. Al presidente Mesa se le otorgó un plazo para buscar la estabilización política del país, tarea a la que probablemente se encomendó con compromiso, pero en la que la presión de la comunidad internacional no le permitiría ser exitoso. Como explica Gutiérrez, la estrategia de Mesa fue avalar las demandas populares, mostrar voluntad política al mismo tiempo de avanzar de manera mucho más modesta, encubriéndose con artimañas de procesos estatales. El límite que Mesa fijaba era la ‘normatividad internacional’ y las ‘obligaciones del gobierno ante la comunidad de naciones’ (Gutiérrez Aguilar, 2008: 318), y de tal manera se empeñó en un ajuste muy parcial de la Ley de Hidrocarburos, que encontró resistencia del MAS (que insistía en su propia ley) y la demanda popular por la nacionalización de los hidrocarburos.

Por otro lado, el gobierno de Mesa se veía socavado por la activación de un regionalismo politizado que comenzó en Santa Cruz bajo la coordinación del Comité Cívico de Santa Cruz, y que prontamente se expandiría a otros departamentos (Beni, Tarija y Pando). De esta manera, se conformó un bloque de oposición conocido como la *Media Luna*. En abierto desafío al gobierno central, cuatro regiones decidieron convocarse a un referéndum para decidir el tema autonómico en mayo del 2005, ignorando explícitamente los llamados al diálogo por el presidente (41). Estas iniciativas no sólo ponían en tela de juicio a la autoridad presidencial, sino que también coadyuvaban a una intensificación del conflicto social en la medida en que las organizaciones indígenas y campesinas las interpretaban como una estrategia de la ‘oligarquía’ separatista en detrimento de la demanda por la Asamblea Constituyente. Desde el punto de vista legal, las autonomías tampoco figuraban en la Constitución Política del Estado y este tema debía previamente ser tratado en esa instancia. Así el ambiente político se polarizó en un bando de organizaciones sociales indígenas y campesinas – que abalaban la ‘agenda de octubre’ y la demanda de Asamblea Constituyente –, y otro de la *Media Luna* – con su ‘agenda de enero’ y la demanda por autonomías departamentales (42).

(41) ‘Crónica Bolivia.- Mesa apuesta por el diálogo sobre hidrocarburos y desoye las manifestaciones que piden su renuncia’. *Europa Press – Servicio Latinoamericano*, 25 de mayo de 2005.

(42) La ‘agenda de Enero’ comprende las consignas que emergen del ‘cabildo abierto’ convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz en enero del 2005, en el cual a través de un proceso seriamente cuestionado de recolección de firmas, planteaba las autonomías departamentales. Pacto de Unidad (2010) *El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política de Estado*, Programa NINA, La Paz, Bolivia.

El MAS y Morales continuarían como líderes de la oposición en el ámbito político formal, y si bien mantendrían el activismo en las calles a través de los vínculos orgánicos, era claro que evitarían las posiciones más radicales de las demandas populares. Así, por ejemplo, insistieron en su propia Ley de Hidrocarburos e incluso defendieron la presidencia de Mesa ante las protestas sociales que comenzaban a reclamar su renuncia (43). De esta manera, el MAS dejaba el espacio para que las organizaciones indígenas campesinas crecieran y fueran cada vez más visibles en las subsiguientes olas de protestas, en ocasiones sobrepasando el liderazgo del MAS:

‘Si hasta el viernes 27 de mayo el Gobierno y los parlamentarios no responden a nuestras demandas de convocar a la Asamblea Constituyente y nacionalizar los hidrocarburos, cuidado que se arrepientan porque las mayorías nacionales radicalizaremos las medidas de presión en todo el territorio nacional.’ (44)

‘Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), no pide la nacionalización de la industria energética como sus antiguos aliados. Se conforma con que el Estado comparta las ganancias con las empresas extranjeras y administre la comercialización de esos recursos. En represalia a lo que considera como “una traición a la causa del proletariado”, un piquete de la Confederación Obrera Regional (COR) cerró el paso de los adeptos al líder cochacero cuando éstos marchaban hacia La Paz.’ (45)

En los meses siguientes, el poder de decisión política volvería a la movilización social, imponiéndose sobre las estructuras políticas formales. Dos hechos importantes conllevan a esta conclusión: ante el creciente malestar político en torno a la cuestión del gas, a mediados de mayo de 2005 en un cabildo en la ciudad de La Paz se impone a Morales la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos, obligándole a renunciar a la defensa de su Ley de Hidrocarburos; luego, a principios de junio con el bloqueo de dos tercios de las carreteras del país, los movimientos sociales demandan la ‘triple renuncia’ (46). Los resultados de estas movilizaciones fueron que Morales y

(43) ‘Evo Morales: “Mesa tiene que cumplir su mandato” hasta 2007’. Agence France Presse, 8 de marzo de 2005.

(44) Román Loayza, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, citado en ‘Crónica Bolivia.- Mesa apuesta por el diálogo sobre hidrocarburos y desoye las manifestaciones que piden su renuncia’. *Europa Press – Servicio Latinoamericano*, 25 de mayo de 2005.

(45) ‘Bolivia. Carlos Mesa deja al Congreso la gestión energética del país’. *El Mundo*, 18 de mayo de 2005.

(46) Con ella se proyectaba una salida política al impasse, en la que la renuncia del presidente Mesa fuera sucedida por la renuncia del presidente de la cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y por el presidente de la cámara de Diputados, Mario Cossío (ambos asociados con los partidos tradicionales de corte neoliberal). De tal manera, siguiendo la normativa, la presidencia debía ser asumida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como presidente de emergencia, con la única función de convocar a nuevas elecciones en un lapso menor a seis meses.

el MAS cambiaron la propuesta de ley por el mandato de la nacionalización, y que sólo días más tarde de postulada la demanda, el 9 de junio se efectúa la triple renuncia posesionando a Eduardo Rodríguez Veltzé, entonces el máximo representante del Poder Judicial y, por tanto, contemplado en la Constitución como parte de la línea de sucesión presidencial, como nuevo presidente interino de la República.

Rodríguez Veltzé tenía la única tarea de convocar a elecciones nacionales, suspendiendo el tema de la Constituyente hasta que se instalara un nuevo gobierno. En el periodo de campaña electoral, los movimientos sociales indígenas continuaron ejerciendo presión sobre el proceso político a través del bloqueo de caminos y protestas, marcando tanto el contenido como los resultados de los comicios. Esta prominencia del movimiento indígena se expresa, por ejemplo, en su postura ante la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (el núcleo de la COB), que en agosto del 2005 propone formar un 'frente de frentes' que apoye una candidatura, y decide cerrar filas detrás de la candidatura del MAS. Por su lado, la propuesta del líder social, Álvaro García Linera (47), de formar un frente único tiene una amplia acogida en El Alto (localidad que por su papel en la Guerra del Gas conservaba un fuerte peso político), donde tanto las juntas vecinales, como la Central Obrera y los campesinos, también determinan apoyar la candidatura de Morales (48).

Las elecciones celebradas en diciembre del 2005 otorgarían una inédita victoria para el Movimiento al Socialismo, que obtuvo cerca del 54 por ciento de la votación (hubo un 85 por ciento de participación ciudadana). Dicha victoria responde sin duda a la coyuntura y complejidad del proceso político, pero la lectura común parece adjudicar un papel central al liderazgo político de Morales y su capacidad de realizar alianzas políticas que ampliaron su base de apoyo en la ciudadanía. En este sentido, la alianza con una figura intelectual reconocida de la clase media –Álvaro García Linera como candidato a la vicepresidencia– fue efectivamente de gran importancia, ya que a través de la apertura de las listas del Movimiento al Socialismo a este grupo de personas, se formó un puente entre el movimiento indígena y la izquierda intelectual (Harten, 2011: 127-150).

(47) Álvaro García Linera presenta a una figura de clase media, que estudio matemáticas en la Universidad Autónoma de México desde 1981 hasta 1985. A su retorno a Bolivia se afilió a la causa indígena, derivando eventualmente en grupos radicalizados aunque principalmente como ideólogo. En 1992 fue arrestado bajo acusaciones de terrorismo, y aunque nunca fue convicto, permaneció en prisión por cinco años. En ese periodo estudió sociología (se le alega haber leído más de mil libros) y recibió su grado cuando fue liberado en 1997. Después trabajo como profesor universitario y comentarista de noticias, volviéndose una figura pública muy respetada, mientras que continuó dedicando su trabajo intelectual y opinión académica a las causas sindicales y de los movimientos indígenas de América Latina.

(48) Surgen dificultades en formación de frente de izquierda en Bolivia'. *Agencia Mexicana de Noticias, NOTIMEX*, 9 de agosto de 2005.

Si bien el papel del liderazgo es de importancia –y será retomado más adelante–, la influencia de los movimientos sociales no es reconocida en plenitud. Es notable que gran parte de la literatura académica se concentre en el liderazgo de Morales, subestimando la incidencia política de los movimientos sociales indígenas en este periodo. Como mencionamos anteriormente, Morales y el MAS se ven un tanto obligados a adoptar la posición de los movimientos sociales respecto a la cuestión del gas –la nacionalización– y la Asamblea Constituyente, los temas más importantes de la campaña electoral. La fuerza de la presión de los movimientos sociales en ese momento se expresa aún mejor en el hecho que los partidos políticos que competían en la campaña adoptan también dicha consigna. Así, el partido derechista PODEMOS promovía una ‘nacionalización del beneficio’, mientras que el partido de centro Unidad Nacional hablaba de una nacionalización ‘mediante acciones’. De tal manera, los movimientos sociales no sólo obligaron las elecciones adelantadas, sino que definieron de manera efectiva la agenda política en torno a la cual se libraba la campaña electoral.

Hacia el 2005, en el escenario de las movilizaciones, los movimientos sociales indígenas campesinos fueron ganando ascendencia sobre el MAS y, como explica John Crabtree, a partir del proceso electoral del 2005 la cuestión indígena se volvería central para la identidad del partido (2011: 136). La conformación del primer gabinete ministerial del gobierno de Morales muestra una ruptura clara con el pasado, en favor de la participación de estos sectores en la política formal: de los 16 secretarios de Estado, sólo dos no eran de origen indígena y varios de ellos provenían del activismo del movimiento indígena campesino (49).

La llegada de Morales al poder constituye el resultado de la adopción y reconocimiento de un papel político explícito de los movimientos sociales, en particular los movimientos indígenas. Después de décadas caracterizadas por una opuesta manifestación a las estructuras estatales, en el momento de mayor poder político, los movimientos sociales optaron por la toma del poder político a través de esas mismas estructuras. Esta constatación rompe con la caracterización de los movimientos sociales como actores ‘anti-Estado’ o ‘a-políticos’ y habla más bien a favor cuestionar la pertinencia de la división entre política ‘institucionalizada’ y la ‘no institucionalizada’.

(49) Podemos destacar las siguientes carteras: Relaciones Exteriores. David Choquehuanca, con una larga historia de activismo en el movimiento campesino indígena (entre otros, la CSUTCB). También fue coordinador nacional del programa de formación y capacitación de líderes indígenas NINA; Desarrollo Económico, Celina Sosa Luna, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; Educación, Félix Patzi Paco, sociólogo e intelectual aymara, ideólogo del movimiento indígena; Trabajo, Santiago Gálvez Mamani, dirigente nacional de la Federación de Fabriles; Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Hugo Salvatierra, de origen chiquitano con un largo vínculo con los movimientos sociales, fue asesor legal de la Central Obrera Boliviana y de otras organizaciones sindicales; Minería y Metalurgia. Wálter Villarroel, dirigente minero, fue presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Fencomin; Justicia, Casimira Rodríguez, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar; Agua, Abel Mamani, fue presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto.

2.5 Reflexiones finales

La difícil transición democrática fue acompañada por una implementación estricta de un modelo económico neoliberal dirigida a estabilizar el caos económico que marcó el gobierno de la UDP. Con ese objetivo, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro emprendió la desarticulación del fuerte movimiento sindical, atacando directamente su columna vertebral a través de la clausura de las minas. La consecuente ‘relocalización’ de grandes grupos de mineros al interior del país fue así acompañada de la transmisión de la experiencia sindical minera a otras regiones al interior del país, lo cual sin duda contribuyó a una mejor articulación del movimiento indígena campesino. De tal modo, una COB debilitada pudo ser relevada por una serie de nuevos movimientos sociales rurales que más tarde encontrarán un locus en la lucha municipal, y que poco a poco llegarían a ocupar un lugar importante en el ámbito nacional en la forma de organizaciones como la CSUTCB y el movimiento cocalero.

La estabilización política y económica afectó negativamente a los sectores populares de la población, ya que se dio al margen del desarrollo social, sirviendo casi exclusivamente los intereses de una élite económica. El sistema de representación a través de los partidos políticos, históricamente excluyente, no logró crear vínculos reales con grandes segmentos de la ciudadanía. En la medida en que la hegemonía neoliberal nos les permitía representar los intereses de la población –sobre todo en el contexto de las consecuencias de la crisis económica– los partidos políticos sufrieron una suerte de ‘cooptación’ por parte de la élite socioeconómica, perdiendo así su papel de mediación entre el Estado y la sociedad, y derivando paulatinamente en un crisis de legitimidad.

Por su lado, la articulación de fuertes movimientos sociales –en particular indígenas campesinos– durante las décadas de los ’80 y los ’90, no sólo ponían en evidencia el fracaso del modelo de construcción de Estado-Nación en torno a la asimilación y el ideal de mestizo, sino también que planteaba el rechazo a un modelo de desarrollo y la insatisfacción con el sistema político en general. La Guerra del Agua forma el antecedente para establecer la legitimidad y efectividad de la acción movilizadora como medio de participación política efectiva. Así en el periodo 2000-2005, el movimiento social se vuelve el actor político central, asumiendo el papel de mediación hacia el Estado y mostrándose una y otra vez efectivo en hacer valer los intereses de la ciudadanía por encima de los planes gubernamentales. De tal modo, bajo el cuestionamiento de la división entre política ‘institucionalizada’ y ‘no institucionalizada’ se entiende que el movimiento social como el partido político pertenece a un mismo sistema de mediación entre el Estado y la sociedad, a través de los cuales los límites entre estos dos se tornan borrosos.

En una relación ‘dialéctica’ entre Estado y sociedad, los movimientos sociales atraviesan por un proceso rápido de articulación política –con hitos importantes en el movimiento cocalero y la creación del ‘instrumento político’– donde el MAS

pasa de ser un actor de alcance local y de intereses sectoriales a formar un partido político a nivel nacional; y después de la oposición al gobierno. Al mismo tiempo, el periodo 2000-2005 muestra también cierta complejidad de esta articulación, ya que los movimientos sociales no inciden en la arena política exclusivamente a través del MAS, como ilustra el Pacto de Unidad. Lo cierto es que los movimientos sociales optan finalmente por una salida institucional-democrática al impasse político. El clima político después de la Guerra del Gas se prestaba a pensar en grandes cambios. Sin embargo, aún después del fracaso de la sucesión constitucional de Mesa, y a pesar de expresiones más radicales, los movimientos sociales optaron por llegar al poder político a través de un proceso electoral formal.

La evolución del movimiento social en el actor político de mayor incidencia tiene una expresión paralela en el liderazgo de la lucha popular que el MAS terminaría por encarnar hacia fines del 2005. Ésta pasa por el movimiento cocalero en los años noventa, del que emerge el liderazgo político de Evo Morales, seguido por los movimientos sociales urbanos en defensa de los recursos naturales (la Guerra del Agua y la Guerra del Gas) y termina, finalmente, en la ascendencia del movimiento indígena campesino, concretizada en la centralidad que asumiría la consigna de la Asamblea Constituyente en su primer gobierno. En este sentido, la victoria electoral de Morales, más que una habilidad del MAS bajo su liderazgo de inducir a los movimientos sociales indígenas a cerrar filas detrás de él, responde más acertadamente a una determinación de los movimientos sociales indígenas campesinos, representados cada vez mejor en el Pacto de Unidad, de apuntar al poder político a través del proceso electoral.

El periodo 2000-2005 puede ser entonces entendido como un ‘ciclo de las movilizaciones sociales’ con una ‘conclusión democrática’ (Prada, 2008: 142). Dicho de otra manera, la victoria electoral de Morales y el MAS es el resultado directo de las luchas populares que protagonizaron los movimientos sociales, y manifiestan el poder político que estos actores desarrollaron en dicho periodo. Las conquistas de los movimientos sociales les investirán paulatinamente de una mayor legitimidad creando una nueva dinámica de relación Estado-Sociedad en un proceso de mutua redefinición. Así, el Estado se redefine ya en la década de los noventa –reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural del país– mientras que en la Sociedad los movimientos sociales –en particular el movimiento indígena campesino– se redefinen al asumir un rol político más explícito y activo. A esto se suma un tercer facto en la dinámica, a saber la crisis de legitimidad que sufre el sistema de representación política formal a causa de la ‘cooptación’ de los partidos políticos.

En el siguiente capítulo veremos cómo ese proceso de redefinición continúa en el que los movimientos sociales, cuyo accionar es reconocido e interiorizado en la lucha política, protagonizan la construcción de un nuevo pacto social y con él, la redefinición de las relaciones Estado-sociedad.

